

San Salvador, 9 de diciembre de 2013.

**Señores comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.**  
**Presente.-**

**Yo, María Ester Alvarenga Chinchilla, Mayor de edad, empleada, con Documento Único de Identidad número xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. A ustedes expongo:**

**I. Fundamentación Fáctica de los hechos:**

El día 28 de octubre del presente año, nosotros, un grupo de personas de la sociedad civil, nos avocamos al Ministerio de Defensa a solicitar información sobre lo siguiente:

*A) Libro de novedades:*

- a. Destacamento militar N° 4, San Francisco Gotera.*
- b. Destacamento militar N° 1, de Chalatenango.*
- c. Batallón Atlacatl.*
- d. Quinta Brigada de Infantería.*
- e. Guardia Nacional de San Marcos Lempa.*
- f. Guardia Nacional del Cuartel Central en San Salvador.*
- g. Fuerza Aérea.*
- h. Destacamento Militar de Zacatecoluca.*

*B) Información sobre la captura, traslado, ingreso a bases militares, entrega a la Cruz Roja o cualquier otra persona natural o jurídica, de los siguientes niños y niñas por parte de elementos militares:*

- a. Ernestina y Erlinda Serrano Cruz: las dos niñas fueron llevadas por el ejército el 2 de junio de 1982 en el departamento de Chalatenango.*
- b. Julia Inés Contreras, de 8 meses, desaparecida en la masacre de la Conacastada, departamento de San Vicente, entre los meses de junio y agosto de 1982.*
- c. Ana Julia Portillo Ramírez, de 15 años de edad y Carmelina Portillo Ramírez, de 7 años de edad, las dos niñas fueron llevadas por el ejército en el cantón Cerro Pando, municipio de Meanguera, departamento de Morazán, en el contexto de masacres del Mozote y lugares aledaños.*
- d. Emelinda Lorena Hernández Sánchez, de 1 año de edad, desaparecida por el Batallón Atlacatl, el 11 de diciembre de 1981, en Cantón La Joya, municipio de Meanguera, departamento de Morazán, en el contexto de la masacres del Mozote y lugares aledaños.*
- e. Santos Ernesto Salinas, de 9 años de edad, desaparecido el 25 de octubre de 1982, en el municipio de San Nicolás Lempa, específicamente en la zona del puente de oro. El niño fue capturado en una tienda por elementos de la Guardia Nacional y el BIRI Atlacatl, que lo llevaron con rumbo desconocido.*

información que data de más de 5 años, y estuvimos de acuerdo, porque lo que a nosotras y nosotros nos interesa es que las instituciones públicas respeten el derecho de acceso a la información pública, pero sucede que el Ministerio de Defensa, en fecha dos de diciembre del presente año, declara en su respuesta que la información es inexistente y así fue notificada, dando entonces la oportunidad de recurrir dicha resolución por no haber sido efectivamente acreditada la inexistencia de la información solicitada, causando el agravio de denegar la información de carácter público sin fundamentar ni probar mínimamente sus argumentaciones, creando una incertidumbre jurídica atentatoria del espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Acudimos a tan Honorable Instituto, que ha nacido por una ley que tiene por espíritu garantizar la máxima transparencia, en especial cuando se trata del acceso a la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, porque el interés difuso de la colectividad es supremo a cualquier interés particular; así, como el Ente garante de nuestro derecho de acceso a la información Pública y de la misma ley, para que sienten un precedente doctrinario en esta materia, por la vía administrativa y se le exija al Ministerio de Defensa Nacional la información requerida.

## **II. Fundamento de Ley para la Pretensión:**

Se pretende que se revoque la resolución que deniega la información solicitada al Ministerio de Defensa Nacional, donde la declara inexistente, por falta de motivación y prueba razonada de su inexistencia, que en consecuencia se ordene la entrega de la información relacionada supra, que fue solicitada directamente a la oficina de Información y Respuesta, asimismo **se permita el acceso para su estudio de los documentos mencionados de la época del conflicto armado según ha sido solicitado.** Para fundamentar esta pretensión citamos la normativa legal pertinente:

### **Artículo 6 Constitución de la República.**

***Se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de las personas.***

Cuando la carta magna, prescribe un derecho, el estado está obligado a respetarlo, protegerlo y garantizarlo, claro está, por medio de sus instituciones públicas, ya sean administrativas, jurídicas, o legislativas, los que nos lleva todavía más a fondo a delimitar la responsabilidad del Ministerio de justicia como tal, a respetar este derecho, como una institución de gobierno, obligada.

Pero esta respuesta no ha de ser evasiva, porque devendría en un acto arbitrario; por el contrario, exige una responsividad amplia, abierta y razonada hacia la ciudadanía, como complemento efectivo de su derecho.

### **Artículo 2 Ley de Acceso a la Información Pública.**

**Toda persona tiene derecho a solicitar recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes**

2

**Sustanciación en caso de ser inexistente la información solicitada.**

### Legitimación objetiva para apelar la resolución provista.

De toda la legislación relacionada, considero que se acredita la pretensión de recibir la información solicitada, en razón de no haberse acreditado en la debida forma su inexistencia.

Por tanto, con todo respeto a ustedes pido:

- Se admita el presente escrito de apelación
- Se inicien las respectivas investigaciones.
- Se notifique a las partes intervinientes.
- Se pronuncie sentencia de mérito en el momento procesal oportuno.
- Se proceda a ordenar la entrega de la información requerida al Ministerio de la Defensa Nacional.

Señalo para oír notificaciones el telefax xxxxxxxx y xxxxxxxxxxxx, así como el correo electrónico: xx



<b>RECIBIDO</b> Instituto de Acceso a la Información Pública	<b>Fecha:</b> 9 Dic / 2013	<b>Hora:</b> 3:42 PM
	<b>Nombre persona que recibe:</b> <u>Uziel Medina</u>	
	<b>Cargo:</b> <u>Secretario</u>	<b>Firma:</b> <u>[Signature]</u>



IAIP 71-A- 2013 (CO)

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos, del día doce de diciembre de dos mil trece.

Por recibido el escrito presentado el día nueve de los corrientes por la ciudadana MARIA ESTER ALVARENGA CHINCHILLA, en el que interpone recurso de apelación de la resolución del dos de diciembre del presente año, proveída por el Ministerio de la Defensa Nacional, en la que se declara inexistente la información solicitada.

Al estudiar el recurso de apelación planteado, este Instituto advierte, que la solicitante ha hecho mención de que la resolución en comento le fue notificada por la citada Secretaría de Estado, sin embargo, no anexa documentación alguna, con la que pueda corroborarse que dicha resolución, supuestamente emitida por el Oficial de Información del ente obligado, corresponda a una solicitud de información seguida de acuerdo al procedimiento establecido por la LAIP.

La Ley de Acceso a la Información Pública, establece en el Art. 86 lo siguiente “*El Instituto deberá subsanar las deficiencias de derecho de los escritos interpuestos por los particulares tanto para el recurso de apelación como en las denuncias y únicamente si esto no fuere posible requerirá al solicitante que subsane su escrito en un plazo de tres días hábiles (...)*”.

De lo anteriormente expuesto se infiere que, la peticionaria debe subsanar las deficiencias relativas a los hechos; es decir, para el caso en particular, los documentos de respaldo que sustenten su inconformidad; habilitando a este Instituto a realizar prevenciones en caso de ser necesarias. Asimismo, la letra a del Art. 84 de la LAIP, establece dentro de los requisitos mínimos que debe de llenar el escrito de interposición del recurso de apelación, que se detalle: “*la dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud*”.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los Arts. 18 de la Constitución, 82 y 84 de la LAIP; este Instituto **RESUELVE:**

*Previénesele* la ciudadana **MARIA ESTER ALVARENGA CHINCHILLA** para que presente, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, copia de la solicitud de información presentada ante el ente obligado; y constancia de notificación de la resolución apelada.

*Notifíquese.*

RV.





NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

## NOTIFICACIÓN IAIP 71-A-2013 Prevención

1 mensaje

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

17 de diciembre de 2013, 15:54

Para: xxx

Sra. María Ester Alvarenga Chinchilla  
Presente.

A través de este medio, se le adjunta auto de prevención referente al caso IAIP 71-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibo.

Lic. Milton E. Hernández  
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080



IAIP 71-A-2013 Prevención.pdf

728K







C

C



NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

---

## Subsanación de prevenciones

---

20 de diciembre de 2013, 9:48

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Instituto de Acceso a la Información Pública.

En relación a la prevención formulada respecto de la Apelación presentada contra la Resolución que declara inexistente la información solicitada a la oficina de Información y Respuesta del Ministerio de la Defensa Nacional, tengo a bien remitir en nombre de la señora María Ester Alvarenga Chinchilla la documentación que es requerida.

Por tal motivo les pido muy amablemente:

1. Tengan por recibido el presente correo electrónico.
2. Tenga por recibida la documentación adjunta.
3. De continuidad al procedimiento de ley.

Aprovecho para enviar un distinguido saludo y consideración.

Roberto Rugamas.  
Abogado de Pro-Búsqueda.

---

### 3 archivos adjuntos



OIR Ministerio Defensa Nacional.pdf  
3991K



OIR Ministerio Defensa Nacional 2.pdf  
310K



Resolución OIR FAES.pdf  
789K





San Salvador, 28 de octubre de 2013.

**Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa Nacional**  
**Oficial de Información**  
**Presente**

Reciba un cordial saludo y éxito en el desempeño de sus labores.

Nosotras, Maria Ester Alvarenga Chinchilla, con Documento Único de Identidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, empleada de Asociación Pro-busqueda; Marina Dolores Ortiz, con Documento Único de Identidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, empleada de Asociación Pro-busqueda; Maria Margarita Zamora Tobar, con Documento Único de Identidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, empleada de Asociación Pro-busqueda. En virtud de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, (LAIP) cuyo cuerpo normativo expresa que toda persona tiene el derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas, de manera oportuna, veraz y sin sustentar motivación alguna, venimos a requerir lo siguiente:

**A) Libro de novedades:**

- a. Destacamento militar No. 4, en San Francisco Gotera.
- b. Destacamento Militar No. 1 de Chalatenango.
- c. Batallón Atlacatl.
- d. Quinta Brigada de Infantería.
- e. Guardia Nacional de San Marcos Lempa.
- f. Guardia Nacional del Cuartel Central en San Salvador.
- g. Fuerza Aérea.
- h. Destacamento Militar de Zacatecoluca.

**B) Información sobre la captura, traslado, ingreso a bases militares, entrega a la Cruz Roja o cualquier otra persona natural o jurídica, de los siguientes niños y niñas por parte de elementos militares:**

- a. Ernestina y Erlinda Serrano Cruz: las dos niñas fueron llevadas por el ejército el 2 de junio de 1982 en el departamento de Chalatenango.
  - b. Julia Inés contreras de 8 meses de edad desaparecida en la masacre de la Conacastada, departamento de San Vicente, entre los meses de junio y agosto de 1982.
  - c. Ana Julia Portillo Ramírez, de 15 años de edad y Carmelina Portillo Ramírez, de 7 años, las dos niñas fueron llevadas por el ejército en Cantón Cerro Pando, Municipio de Meanguera, departamento de Morazán, el 14 de diciembre 1981.
  - d. Emelinda Lorena Hernández Sánchez, de 1 año de edad, desaparecida por el Batallón Atlacatl, el 11 de diciembre de 1981, en Cantón la Joya, municipio de Meanguera, departamento de Morazán, en el contexto de las masacres del Mozote y lugares aledaños.
  - e. Santo Ernesto Salinas, de 9 años de edad. Desaparecido el 25 de octubre de 1982, en el Municipio de San Nicolás Lempa, específicamente en la zona del Puente de Oro. El niño fue capturado en una tienda por elementos de la Guardia Nacional y BIRI Atlacatl, que lo llevaron con rumbo desconocido.
  - f. Manuel Antonio Bonilla Osorio, de 9 años de edad y Ricardo Ayala Abarca, de 10 años de edad. Ambos niños fueron desaparecidos por el ejército en el desvío los Conejos, en el cantón San Jacinto la Burrera, Municipio de San Esteban Catarina. Llevándoselos con rumbo desconocido el 22 de agosto de 1982, en el contexto de la masacre de El Calabozo.
  - g. Vilma García Cruz y Sofía García Cruz. La primera de 5 años y la segunda de 6 años de edad, ambas hermanas, fueron desaparecidas el 4 de junio de 1981, en la Finca Peña, Municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.
  - h. Ceferino Ruiz Chacón, cuya edad era aproximadamente de entre los 30 a 45 días de nacido. Desaparecido el 4 de junio de 1981, en la Finca Peña, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.
  - i. José Vicente, de 11 años de edad; Juana Noemí, de 10 años; Norma, de 7 años; Gladys Zuleyma, de 6 años; Vilma, de 8 años; todos de apellido Rivas, desaparecieron el 14 de junio de 1982, en la masacre de San Juan Buena Vista conocida como la Conacastada, departamento de San Vicente.
  - j. José Adrián Rochac, de 5 años de edad. Desaparecido el 12 de diciembre de 1981, en su casa de habitación ubicada en Cantón San José Segundo del Municipio del Municipio de San Martín. Este operativo estuvo coordinado por
-

la Fuerza Aérea con base en Ilopango y Defensas Civiles de la zona, en el allanamiento a la vivienda fue asesinada la señora María Silveria Rochac, madre de José Adrián y su hermano Sergio Antonio Rochac de 11 años de edad.

- k. Boris Napoleón Martínez Cortez, de 8 años de edad. Desaparecido el 7 de septiembre de 1980, en el Cantón Concepción Los Planes, de San Francisco Chinameca, La Paz. Los grupos paramilitares (patrulleros) en combinación con la Guardia Nacional llegaron a la casa de la familia Martínez y asesinaros a los abuelos y a un trabajador de la familia y se llevaron al niño.

Con el fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones del Estado y según lo establecido en el artículo 19 (LAIP), donde se establece que no podrá invocarse el carácter de información reservada cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales, esperamos recibir dicha información en los plazos estipulados por la ley.

Solicitamos nos notifiquen y envíen la información pertinente a las siguientes direcciones de correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Y nuestros teléfonos de contactos son

Sin otro particular y en espera de pronta respuesta nos suscribimos de usted.

Atentamente.





# MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

## *Unidad de Acceso a la Información Pública*

### REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN

San Salvador, a las 1400 del día 30 de octubre de 2013, La Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de la Defensa Nacional, solicita la Señora **MARÍA DOLORES ORTIZ**, quien se identifica con su DUI número xxxxxxxxxxxxxxxxx extendido en el municipio de San Salvador departamento de San Salvador, el día 07 de julio de 2010; quien con fecha 28 de octubre del 2013, envió solicitud de información con número de referencia asignado por esta oficina; **B3.1-015-0 60/28OCT013**, Informándole que para dar consecución a su solicitud se requiere **ESPECIFIQUE O AMPLIE** su requerimiento según lo siguiente:

### INFORMACIÓN REQUERIDA

- 1.- Libro de novedades:
  - a.- Destacamento Militar No. 4 en San Francisco Gotera.
  - b.- Destacamento Militar No. 1 de Chalatenango.
  - c.- Batallón Atlacatl.
  - d.- Quinta Brigada de Infantería.
  - e.- Guardia Nacional de San Marcos Lempa.
  - f.- Guardia Nacional del Cuartel Central en San Salvador.
  - g.- Fuerza Aérea.
  - h.- Destacamento Militar de Zacatecoluca.

### INFORMACIÓN A SUBSANAR

- 1.- ¿A qué tipo de libro de novedades se refiere?, ya que este (Libro de Novedades) es un registro que las unidades orgánicas de la institución llevan hasta nivel de compañía.
- 2.- Especificar el año que requiere de los Libros de Novedad, estableciéndose las características esenciales de la información y el período específico de los datos solicitados.

*Unidad de Acceso a la Información Pública*  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Kilómetro 5 ½ Carretera a Santa Tecla  
2250-0134 - oirmdn@faes.gob.sv



## MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

### *Unidad de Acceso a la Información Pública*

Para lo cual de acuerdo al Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, dispone de cinco días hábiles máximo a partir de la recepción de la presente notificación para indicar otros elementos o corregir los datos.

En caso que usted no subsane su solicitud de información en el plazo antes mencionado deberá presentar una nueva solicitud y reiniciar el trámite correspondiente.

En consecuencia y de conformidad a lo previsto en el Art. 66 inciso 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública y el Art. 45 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta Oficina de Información y Respuesta interrumpe el plazo de entrega de la información, el cual será reanudado en el momento en el que sea subsanado el presente requerimiento.



*[Firma]*  
CEL. ANTONIO RIVAS MORENO  
CNEL. ART. DEM.  
OFICIAL DE INFORMACIÓN MDN

*Unidad de Acceso a la Información Pública*

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Kilómetro 5 ½ Carretera a Santa Tecla  
2250-013- 4 oairmdn@faes.gob.sv

**Contestación de prevenciones.**

From: oirmdn@faes.gob.sv  
To:  
Cc:  
Normal  
Priority: 11-04-2013 04:54 PM  
Date

Buen día, tengo el agrado de dirigirme a usted para remitir la contestación de prevenciones formuladas a la señora Marina Dolores Ortiz con Ref: **Solicitud B3.1-05-0 60/28OCT013.**

Solicito muy amablemente acuse de recibido de la presente comunicación.

Sin otro particular, hago suyos mis mejores saludos y consideración.

Roberto Rugamas.

**Contestación de  
prevenciones OIR MDN.pdf**

**Content-Type:** application/pdf; name="?utf-8?Q?  
Contestaci=C3=B3n\_de\_prevenciones\_OIR\_MDN.pdf?="  
**Size:** 632.94 KB





San Salvador, lunes 4 de noviembre de 2013.

CNEL. ART. DEM.  
JOEL ANTONIO RIVAS MORENO.  
OFICIAL DE INFORMACIÓN.  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Ref. Solicitud B3.1-05-060/28OCT013

Marina Dolores Ortiz, mayor de edad, en mi calidad de solicitante y en atención a la resolución emitida en fecha 30 de octubre de 2013, por medio de la cual se previno "que para dar consecución a su solicitud se requiere **ESPECIFIQUE O AMPLIE** su requerimiento...". En tal sentido vengo a subsanar las observaciones apuntadas dentro del plazo establecido en el Art. 66 de la LAIP sobre los siguientes puntos:

1. Libro de novedades:
  - a. Destacamento militar No. 4, en San Francisco Gotera.
  - b. Destacamento Militar No. 1 de Chalatenango.
  - c. Batallón Atlacatl.
  - d. Quinta Brigada de Infantería.
  - e. Guardia Nacional de San Marcos Lempa.
  - f. Guardia Nacional del Cuartel Central en San Salvador.
  - g. Fuerza Aérea.
  - h. Destacamento Militar de Zacatecoluca.

Sobre lo cual, con todo respeto expongo:

Que **AMPLÍO** el requerimiento a todo registro documental que dispusieran las ocho unidades listadas *supra*, en los cuales se relacione **ingresos y egresos de personas que fueron capturados durante las operaciones militares de contrainsurgencia en las zonas rurales, sean adultos, niños y niñas**. En las guarniciones militares mencionadas se llevaba registro diario de las personas (adultas, niñas y niños) que ingresaban procedentes de las zonas en conflicto, sea que estos se denominen "libros de novedades", "bitácoras" o cualquier otro nombre, asimismo según el Art. 66 literal d. LAIP, podamos consultar directamente las fuentes dichas.

También **ESPECÍFICO** esta solicitud en el sentido de delimitarla en el tiempo entre el día 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1984.

En razón de lo cual, amablemente solicito:

1. Tenga por recibido el presente escrito;
2. Tenga por subsanadas las prevenciones formuladas;
3. Continúe el trámite de Ley;
4. Extienda la información solicitada.

Señalo para oír notificaciones el número de fax 22351039; los correos electrónicos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; y la dirección xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Sin otro particular, aprovecho para remitir un distinguido saludo y consideración.



# MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

## *Unidad de Acceso a la Información Pública*

### RESOLUCION DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

No.B3.1-015-060/04NOV013

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, San Salvador, a las 0900 horas del día 02 de diciembre del 2013, posterior a recibimiento y admisión de la solicitud de información No. B3.1-015-060/04NOV013, presentada en la Oficina de Información y Respuesta (OIR-MDN) de esta Secretaría de Estado, por parte de la Señorita **MARÍA DOLORES ORTIZ**, quien se identifica con su DUI número, extendido en el municipio de San Salvador departamento de San Salvador, el día 07 de julio de 2010; y considerando que la solicitud libre cumple con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de La ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y los Arts. 50 y 54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, se ha realizado una búsqueda exhaustiva en los registros que lleva este Organismo y Unidades Militares supuestas involucradas, de cuyo resultado se ha podido establecer que no se encuentra ningún documento o registro relacionado a las supuestas capturas a que hace referencia en el requerimiento. Considerando que la Ley de Acceso a la Información Pública dispone en el art. 73 que nos encontramos ante un caso de información INEXISTENTE, lo que impide brindar lo requerido por la peticionaria, por lo que esta Oficina de Información **CONFIRMA:**

### INFÓRMESE A LA SOLICITANTE

**NO SE PROVEE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR INEXISTENCIA.**

Por lo que en esta fecha 02DIC013, se hace del conocimiento a la solicitante, tal y como fuera requerido en la solicitud libre; dándose cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, del tiempo legalmente establecido. Se requiere a la solicitante acuse recibo de la presente Resolución.



*Joel Antonio Rivas Moreno*  
**JOEL ANTONIO RIVAS MORENO**  
 CNEL. ART. DEM.  
 OFICIAL DE INFORMACIÓN MDN

*Unidad de Acceso a la Información Pública*  
 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Kilómetro 5 ½ Carretera a Santa Tecla  
 2250-0134 - oirmdn@faes.gob.sv



NUE: 71-A-2013 (HF)

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las nueve horas con quince minutos del seis de enero de dos mil catorce.

A sus antecedentes el correo electrónico de fecha veinte de diciembre de dos mil trece, enviado a este Instituto por el licenciado Roberto Rugamas en nombre de la ciudadana **MARIA ESTER ALVARENGA CHINCHILLA**, al que adjunta: a) copias de solicitud de información interpuesta ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de la Defensa Nacional (en adelante MDN) el día 28 de octubre del año pasado; b) requerimiento de ampliación de la solicitud de información emitido por oficial de Información del MDN de fecha 30 de octubre del 2013; c) escrito de ampliación de la solicitud de información de fecha 4 de noviembre del mismo año, y d) resolución del 2 de diciembre de 2013, emitida por el Oficial de Información del MDN, la que fue notificada, por correo electrónico, el mismo día. *Dichos documentos, han sido enviados a este Instituto, con el objeto de evacuar la prevención notificada en fecha 17 de diciembre de 2013, en donde se requirió copia de la solicitud de información, presentada ante el ente obligado y constancia de notificación de la resolución apelada.*

De lo anteriormente expuesto, este Instituto realiza las siguientes consideraciones:

La apelación se funda originalmente, en la inconformidad de la recurrente con la resolución del Oficial de Información del MDN, proveída a las nueve horas del día dos de diciembre de dos mil trece, en la que se *declara inexistente la información solicitada* consistente en: a) Todo registro documental relacionado a los Destacamentos Militares: No. 4, —en San Francisco Gotera—, No. 1 —en Chalatenango—; el Batallón Atlacatl; la Quinta Brigada de Infantería; la Guardia Nacional de San Salvador y San Marcos Lempa; la Fuerza Aérea y el Destacamento Militar de Zacatecoluca; todos, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1984, *en el que se relacione ingresos y egresos de personas que fueron capturadas durante las operaciones militares de contrainsurgencia en las zonas rurales, ya fueren adultos niños y niñas* y; b) Información

sobre la captura, traslado, ingreso a bases militares, entrega a la Cruz Roja o cualquier otra persona natural o jurídica, por parte de elementos militares de los siguientes niños y niñas: Ernestina y Erlinda Serrano Cruz; Julia Inés Contreras, Ana Julia Portillo Ramírez, Carmelina Portillo Ramírez, Emelinda Lorena Hernández Sánchez, Santo Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla, Ricardo Ayala Abarca, Vilma García Cruz, Sofia García Cruz, Ceferino Ruiz Chacón; José Vicente Rivas, Juana Nohemí Rivas, Norma Rivas, Gladys Zuleyma Rivas, José Adrián Rochac y Boris Napoleón Martínez Cortez.

Examinados los argumentos esgrimidos por la peticionaria y el plazo para evacuar la prevención y reuniendo los requisitos mínimos para la admisión del recurso, de conformidad con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 86, 87 y 102 de la LAIP, y los arts. 201 y 423 del Código Procesal Civil y Mercantil, **SE RESUELVE:**

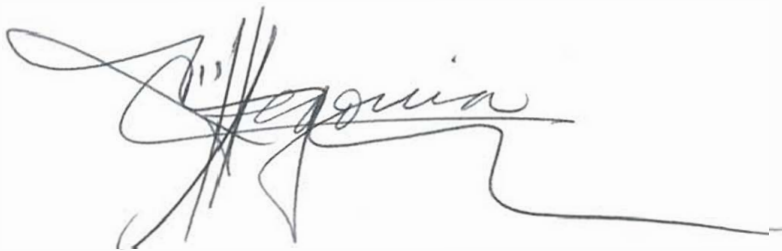
1. *Téngase por evacuada la prevención* en los términos expuestos en los párrafos anteriores;
2. *Agregase* al presente expediente, la información recibida;
3. *Admitase* la apelación interpuesta;
4. *Ordénese* al Oficial de Información del Ministerio de la Defensa Nacional que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de este auto, remita a este Instituto, el expediente administrativo del procedimiento de acceso a la información, promovido por el apelante;
5. *Señálense* **LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE**, para la celebración de la audiencia oral y pública con las partes, a quienes se cita por medio de esta resolución.
6. *Hágase saber* al titular del ente obligado que las resoluciones de este Instituto se le notificarán por medio de su correo electrónico, por lo que deberá señalarlo en todo caso un número de fax para tal efecto y acusar de recibido dentro de las veinticuatro horas

siguientes después del envío; caso contrario, toda resolución se le notificará por cartelera o tablero.

7. *Notifíquese* esta resolución al apelante por medio de los correos electrónicos señalados en el escrito de apelación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y al ente obligado, por medio de su Oficial de Información al correo electrónico de este último: oirmdn@faes.gob.sv, para que, en acto seguido, requiera que su TITULAR rinda informe dentro de un plazo de siete días hábiles a partir de la notificación y ofrezca los medios probatorios idóneos y pertinentes que se conocerán en la audiencia oral, dejándose constancia en el expediente de la remisión realizada.

8. *Requírase* a las partes que de todo escrito que presenten deberán acompañar dos copias del mismo y sus anexos, y remitir una copia escaneada al correo electrónico: notificaciones.iaip@gmail.com.

*Notifíquese.*



**PRONUNCIADO POR LA SEÑORA COMISIONADA QUE LA SUSCRIBE**





Enmendado 15 vale



NOTIFICACIONES IAIP &lt;notificaciones.iaip@gmail.com&gt;

**NOTIFICACIÓN IAIP 71-A-2013 Auto de Admisión**

4 mensajes

**NOTIFICACIONES IAIP** <notificaciones.iaip@gmail.com>

13 de enero de 2014, 11:47

Para: OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA &lt;oirmdn@faes.gob.sv&gt;

Cnel. Joel Antonio Rivas Moreno  
Oficial de Información  
Ministerio de la Defensa Nacional  
Presente.

A través de este medio, se le adjunta auto de admisión, señalamiento de audiencia y documentación anexa referente al caso IAIP 71-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibo.

Lic. Milton E. Hernández  
Notificador IAIP.-

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080

**2 archivos adjuntos**

**IAIP 71-A-2013 Auto de admisión (Oficial de Información).pdf**  
4632K

**IAIP 71-A-2013 Apelación.pdf**  
1387K

**OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA** <oirmdn@faes.gob.sv>

13 de enero de 2014, 14:37

Para: NOTIFICACIONES IAIP &lt;notificaciones.iaip@gmail.com&gt;

Lic. Hernández.

Mucho agradeceré pueda enviar de nuevo esta notificación, estamos teniendo problemas al abrir los archivos adjuntos aunque veo que no son muy pesados no conseguimos abrirlos.

Muchas gracias.

**Joel Antonio Rivas Moreno**  
Cnel. Art. DEM.  
Secretario General y  
Oficial de Información  
Ministerio de la Defensa Nacional.  
Oficina de Información y Respuesta (OIR)  
del Ministerio de la Defensa Nacional



Enmendado 16 vale (19)

16

Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla  
Tel.(503) 2250-0134, Email: oirmdn@faes.gob.sv

---

**De:** NOTIFICACIONES IAIP [mailto:notificaciones.iaip@gmail.com]

**Enviado el:** lun 13/01/2014 11:47

**Para:** OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA

**Asunto:** NOTIFICACIÓN IAIP 71-A-2013 Auto de Admisión

[El texto citado está oculto]

---

**NOTIFICACIONES IAIP** <notificaciones.iaip@gmail.com>

13 de enero de 2014, 15:07

**Para:** OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirmdn@faes.gob.sv>

Cnel. Joel Antonio Rivas Moreno,

En atención a su solicitud, remito nuevamente los archivos adjuntos correspondientes a la notificación del caso IAIP 71-A-2013.

Atentos saludos,

Milton Hernández  
**Notificador IAIP.-**

El 13 de enero de 2014, 14:37, OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirmdn@faes.gob.sv> escribió:

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

---

**2 archivos adjuntos**



**IAIP 71-A-2013 Auto de admisión (Oficial de Información).pdf**  
4632K



**IAIP 71-A-2013 Apelación.pdf**  
1387K

---

**OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA** <oirmdn@faes.gob.sv>

13 de enero de 2014, 17:26

**Para:** NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Lic. Hernández.

Agradezco su amabilidad en enviar de nuevo los archivos, de los cuales acuso recibo de sus conceptos encuentrome enterado.

Con aprecio

**Joel Antonio Rivas Moreno**

**Cnel. Art. DEM.**

**Secretario General y**

**Oficial de Información**

**Ministerio de la Defensa Nacional.**

*Oficina de Información y Respuesta (OIR)*

*del Ministerio de la Defensa Nacional*

*Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla*

*Tel.(503) 2250-0134, Email: oirmdn@faes.gob.sv*





1 mensaje

13 de enero de 2014, 11:47

Para: xxx

A través de este medio, se le adjunta auto de admisión y señalamiento de audiencia referente al caso IAIP 71-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibo.

Lic. Milton E. Hernández  
Notificador IAIP.-

— — —

### Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.  
Teléfono: 2517-2080

 IAIP 71-A-2013 Auto de admisión (Ciudadana).pdf  
2245K





## INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### ESQUELA CORREO ELECTRÓNICO

El Infrascrito Notificador del Instituto de Acceso a la Información Pública, a las 11 horas con — minutos del día 13 de enero de dos mil catorce. Procedo a Notificar en legal forma a María Ester Alvarado Chichilla

en calidad de Apelante. Diligencia que realizo por medio del sistema electrónico proporcionado para tales efectos, correo electrónico

Enviando copia certificada de la resolución pronunciada a las 09 horas con 15 minutos del día 06 de enero del año dos mil catorce, en el expediente con referencia 71-A-2013, la cual recibió Roberto Ruggmar, quien manifestó ser Abogado de Pro-Búsqueda, confirmado por llamada telefónica al número XXXX XXXX. Todo lo anterior de conformidad a lo establecido en los arts. 102 LAIP, en relación al 178 CPCM, teniéndose el acto por notificado transcurridas las veinticuatro horas posteriores a la fecha de la presente acta. No habiendo nada más que hacer constar extendiendo y firmando la presente.

  
MILTON EDGARDO HERNÁNDEZ  
NOTIFICADOR IAIP









**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

*Secretaría General*

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

OFICIO No.	:	<b>SG/OIR-03</b>
DEPENDENCIA	:	Secretaría General/OIR-MDN
CLASIFICACIÓN	:	Confidencial.
FECHA	:	14 de enero de 2014.
ASUNTO	:	Informando
CODIGO	:	B3.1/015

**SEÑOR**  
**LICENCIADO CARLOS ADOLFO ORTEGA**  
**PRESIDENTE DEL IAIP**  
**PRESENTE.-**

Con relación a Resolución No. NUE: 71-A-2013 (HF), y de conformidad al artículo 66 de la LAIP, atentamente informo a usted, que la Señora María Ester Alvarenga Chichilla no ha realizado ningún trámite legal ante la Oficina de información y Respuesta de esta Secretaria de Estado, motivo por el cual, no se le da cumplimiento al artículo 82 de la LAIP.

Sin más por el momento, reitero a Usted mis especiales muestras de consideración y alta estima.



**DIOS UNIÓN LIBERTAD**

*del*  
**JOEL ANTONIO RIVAS MORENO**  
**CNEL. ART. DEM**  
**SECRETARIO GENERAL Y**  
**OFICIAL DE INFORMACIÓN OIR-MDN**

Presentado por Juan Ulises Iriando Artero

Quién se identifica con DUI del 14 a las 15:50 horas  
de Enero de 20 14 Junto con



JOEL ANTONIO RIVAS MORENO  
CHIEF, ART. 100  
SECRETARIO GENERAL Y  
OFICIAL DE INFORMACION DIR. NDI



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
*Secretaría General*

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

OFICIO No. : **SG/OIR-04**  
DEPENDENCIA : Secretaría General/OIR-MDN  
CLASIFICACIÓN : Confidencial.  
FECHA : 27 de enero de 2014.  
ASUNTO : Remisión de Expediente  
CODIGO : B3.1/015

**SEÑOR**  
**LICENCIADO CARLOS ADOLFO ORTEGA**  
**PRESIDENTE DEL IAIP**  
**PRESENTE.-**

Con relación a Recurso de Apelación No. NUE: 71-A-2013 (HF) de fecha 06ENE014, respetuosamente remito expediente completo de la ciudadana MARIA DOLORES ORTIZ con solicitud No. B3.1-015-060/28OCT013. (Tres fotocopias)

No omito manifestar a usted, que no obstante, la Sra. MARÍA ESTER ALVARENGA CHINCHILLA, se hizo presente con el grupo de personas que presentaron la solicitud de información, no fue ella quien se registro legalmente, de acuerdo al artículo 66 de la LAIP, debido a que no portaba DUI, siendo el caso, que esta solicitud la tramitó legalmente la señora MARÍA DOLORES ORTIZ, por lo que, la Sra. ALVARENGA CHINCHILLA no debió ser considerada como apelante por no llenar los requisitos de la LAIP.

Sin otro particular, reitero a Ustedes mis especiales muestras de consideración y alta estima.



**DIOS UNIÓN LIBERTAD**  
  
**JOEL ANTONIO RIVAS MORENO**  
**CNEL. ART. DEM**  
**SECRETARIO GENERAL Y**  
**OFICIAL DE INFORMACIÓN OIR-MDN**

JARM/Abrego.-



Presentado por		Alayla Cardenas Arango Serrano	
del 28 de mayo		Quien se identifica con	
de 20 14		a las 15:00 horas	
Junto con		Instituto	
Administrativo			

No. 236

Libro 9º

AÑO 2014

# Testimonio de Escritura Pública

DE  
PODER ESPECIAL

CAUSANTE  
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

A FAVOR  
RENE ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA  
Y  
SILVIA CAROLINA GUZMAN ALVAREZ

ANTE LOS OFICIOS DE  
YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ SERRANO  
ABOGADO Y NOTARIO



SAN SALVADOR EL SALVADOR C.A.









PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

DOSCIENTOS CATORCE 22  
M. DE H.

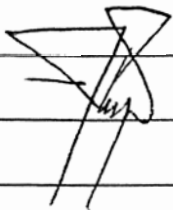
Nº 15052576

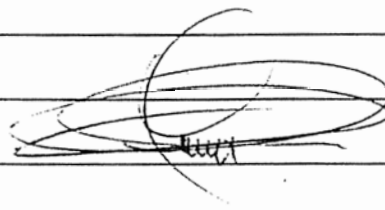
1 NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS. LIBRO NOVENO. PODER ESPECIAL. En la ciudad de San Salvador, a  
2 las ocho horas del día veintitrés de Enero del año dos mil catorce. Ante mi, YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ  
3 SERRANO, Notario, de este domicilio, comparece por una parte el señor DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS, de  
4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de edad, Militar, del domicilio de San Marcos, Departamento de San Salvador, portador de  
5 Documento Único de Identidad número y Numero de Identificación  
6 Tributaria c: actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de la Defensa  
7 Nacional, en calidad de Ministro de la  
8 Defensa Nacional, con Número de Identificación Tributaria  
9 , personería que es legítima y suficiente por haber tenido a la vista, Certificación del Acuerdo Ejecutivo dado en Casa  
10 Presidencial Número DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE de fecha quince de Julio de dos mil trece: en cual consta  
11 que el señor Presidente de la República en su Calidad de Comandante General de la Fuerza Armada en  
12 uso de las facultades legales y de conformidad a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento  
13 sesenta y dos de la Constitución de la República, lo nombró y juramento como Ministro de la Defensa Nacional;  
14 acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial número CIENTO VEINTINUEVE, Tomo CUATROCIENTOS de fecha  
15 quince de Julio de dos mil trece; Y ME DICE: I) Que confiere PODER ESPECIAL, a favor de los Licenciados RENÉ  
16 ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA, mayor de edad, Abogado, del domicilio de la ciudad y departamento de San  
17 Salvador, SILVIA CAROLINA GUZMÁN ÁLVAREZ, mayor de edad, Abogada, del domicilio de Antiguo Cuscatlán,  
18 departamento de La Libertad; para que en nombre de la Secretaria de Estado de la cual es titular, inicien, sigan y  
19 fenezcan diligencias ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en los cuales tenga o pueda tener  
20 interés el Ministerio de la Defensa Nacional, ante las autoridades administrativas y de cualquier otra índole aunque aquí  
21 no se nominen, pues desea que sus Mandatarios no tengan ninguna dificultad en el ejercicio del Mandato. Asimismo los  
22 faculta para firmar los documentos que fueren necesarios, reciban aquellos que tengan que entregárseles, celebren  
23 conciliaciones de cualquier naturaleza y especialmente en materia las que tengan que ver con el Instituto de Acceso a  
24 la Información Pública; confiere a sus Mandatarios las facultades generales del Mandato, todas que explico al

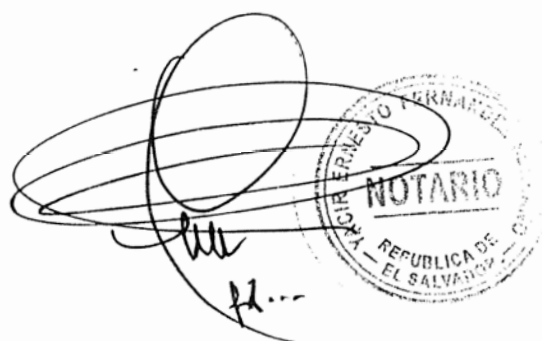




1 otorgante, cerciorándome de que la conoce, comprende y por ello las confiere a sus Apoderados. Asi se expresó el  
2 compareciente, a quien expliqué los efectos legales del presente instrumento el cual leído que le fue por mí,  
3 integramente, en un sólo acto, sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-

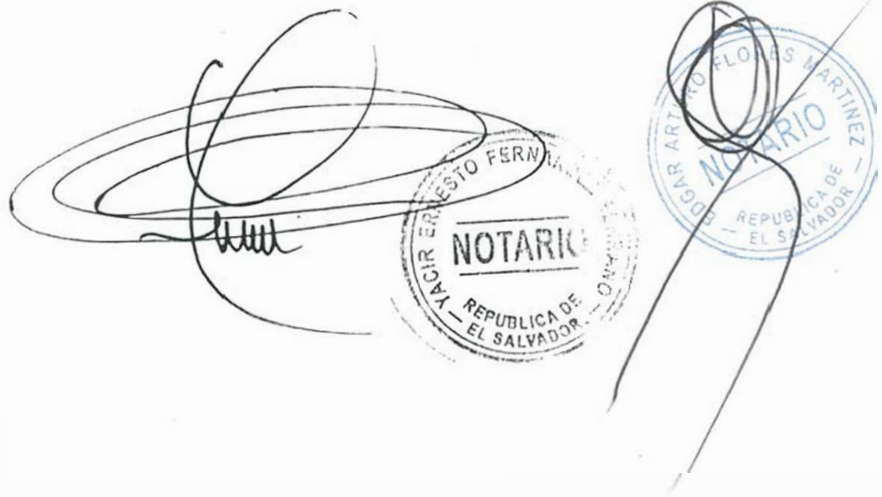
4  
5  
6  
7 

8   
9

  
The stamp is circular and contains the text: "NOTARIO", "REPUBLICA DE EL SALVADOR", and "FERNANDO".



...SO ANTE MI del FOLIO DOSCIENTOS DOCE FRENTE Y VUELTO del Libro Noveno de mi Protocolo que vence el día veinte del mes de Junio de dos mil catorce, y para ser entregado a los Licenciados RENE ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA y SILVIA CAROLINA GUZMAN ALVAREZ, extendiendo, firmo y sello el presente TESTIMONIO DE PODER ESPECIAL, en la ciudad de San Salvador, a los veintitrés días del mes de Enero de dos mil catorce.



The image shows a handwritten signature in black ink, which is a stylized, cursive representation of a name. Below the signature are two circular notary seals. The seal on the left is for 'ACIR ERNESTO FERNANDEZ' and the seal on the right is for 'DOGAR ARTURO FLORES MARTINEZ'. Both seals are from the 'REPUBLICA DE EL SALVADOR' and include the word 'NOTARIO'.

**EL SUSCRITO NOTARIO**, con base al artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: que la presente fotocopia, que consta de tres folio, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó en la Ciudad de San Salvador, a veintiocho días del mes de enero de dos mil catorce.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

1

la audiencia oral, con el ofrecimiento de prueba y exposición de los alegatos por la parte apelada, como queda documentado en el medio magnético dispuesto para tal efecto. No habiendo nada más que hacer constar damos por terminada la presente acta que para constancia firmamos.



Handwritten signatures in blue ink, including names such as "Cecilia", "Luis", "Hernández", "Javier", and "Luis", along with various initials and flourishes.



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

*Despacho del Ministro*

111 2 0 1 4

Dependencia Dirección de Asuntos Jurídicos  
R: DMP/MJBE/ERA E:ERA

San Salvador, 21 de diciembre de 2009.  
ASUNTO: RESP. OFI. 721 Ref: 908-UDVOFM-1-2-2009  
CODIGO: B7D.102

**LICENCIADO  
SIGFREDO ALCIDES CAMPOS CRESPO  
JEFE OFICINA FISCAL MORAZÁN.**

Atentamente me refiero a su Oficio N° 721 REF: 908-UDVOFM 1-2-2009, recibido en esta Secretaría el 03 de los corrientes, mediante el cual requiere información sobre nómina de Oficiales y Soldados con sus respectivos datos de identificación y domicilio, del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl que se vieron inmersos en el operativo militar realizado durante los días ocho al dieciséis de diciembre de 1981 en el Cantón La Joya de Meanguera, lugar también conocido como "El Mozote", todo dentro del proceso de investigación SOBREAVERIGUAR el delito de DESAPARICION FORZADA en perjuicio de la menor EMELINDA LORENA HERNÁNDEZ, hecho supuestamente ocurrido el día 12DIC981 en el Cantón la Joya del Municipio de Meanguera, departamento de Morazán

Sobre el particular, me permito informar que no se ha encontrado la información requerida, dada la naturaleza y tipo de conflicto desarrollado.

Aprovecho la ocasión para presentarle las muestras de mi consideración.

**DIOS UNIÓN LIBERTAD**



**DAVID MUNGUÍA PAYÉS  
GENERAL DE BRIGADA  
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL**



Recibido: 06-01-10  
14:45  
DDH

LA SUSCRITA NOTARIO, en base al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de uno folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la Ciudad de San Salvador a los veintidós días del mes de enero de dos mil ocho.






**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
**Despacho del Ministro**

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
 OFICIO No. 0820  
 DEPENDENCIA DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 CLASIFICACIÓN CONFIDENCIAL  
 FECHA 09ABR013  
 ASUNTO Resp. Of. Ref. 238-UDVOFM-5-10  
 CÓDIGO B3c1a-071

**LICENCIADO**  
**CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ FLORES**  
**JEFE OFICINA FISCAL MORAZÁN**  
**PRESENTE.**

Me complace presentarle un atento y cordial saludo, ocasión que aprovecho para referirme a su Oficio Ref. 238-UDVOFM-5-10 de fecha dieciocho de marzo de dos mil trece, mediante el cual informa que esa Oficina ha aperturado expediente de investigación sobre averiguar el delito de desaparición forzada en perjuicio de ANA JULIA Y CARMELINA MEJÍA RAMÍREZ, hecho ocurrido el día trece de diciembre de 1981, al interior del Cantón Cerro Pando del municipio de Meanguera, departamento de Morazán; por lo que solicita se le proporcione la nómina de Oficiales y Soldados con sus respectivos datos de identificación y domicilio del Batallón de infantería de Reacción Inmediata ATLACATL que se vieron inmersos en el operativo militar realizado del ocho al dieciséis de diciembre de 1981 en referido Cantón, con el objeto de recolectar datos que permitan conocer cuál ha sido el destino de las menores mencionadas.

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que después de haber realizado la búsqueda correspondiente en los archivos de esta institución, no se ha encontrado la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para presentarle mis muestras de consideración y estima.

**DIOS UNIÓN LIBERTAD**



**JOSÉ ATILIO BENÍTEZ PARADA**  
**GENERAL DE DIVISIÓN**  
**MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL**

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
OFICINA FISCAL SAN FRANCISCO (BOTERA)	
<b>RECIBIDO</b>	
HORA:	14:30
FECHA:	15/04/13
NOMBRE:	[Firma]

LA SUSCRITA NOTARIO, en base al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de uno folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la Ciudad de San Salvador a los dieciocho días del mes de enero de dos mil capoe.






FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Despacho del Ministro

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

OFICIO No.	0821
DEPENDENCIA	DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS
CLASIFICACIÓN	CONFIDENCIAL
FECHA	09ABR013
ASUNTO	Resp. Of. Ref.00908-UDCV-6-2009-FG
CÓDIGO	B3c1a-071

LICENCIADO  
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ FLORES  
JEFE OFICINA FISCAL MORAZÁN  
PRESENTE.

Atentamente me refiero a su Oficio N° 0027 Ref. 00908-UDCV-6-2009-FG de fecha dieciocho de marzo de dos mil trece, mediante solicita se le proporcione la nómina de Oficiales y Soldados con sus respectivos datos de identificación y domicilio del Batallón de infantería de Reacción Inmediata ATLACATL que se vieron inmersos en el operativo militar realizado durante los días ocho al dieciséis de diciembre de 1981 en el Cantón La Joya del municipio de Meanguera, departamento de Morazán, lugar conocido como "El Mozote", a efecto de ser agregado a diligencias de investigación que se instruyen en esa Oficina Fiscal por el delito de Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de la niña EMELINDA LORENA HERNÁNDEZ.

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que se realizó búsqueda exhaustiva en los archivos de esta institución, no encontrando la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para presentarle mis muestras de consideración y estima.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



JOSÉ ATILIO BENÍTEZ PARADA  
GENERAL DE DIVISIÓN  
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

JABP/CGGR/ERA



LA SUSCRITA NOTARIO, en base al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de uno folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la Ciudad de San Salvador a los veintiocho días del mes de enero, de dos mil catce.

*[Handwritten signature]*





MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

*Despacho del Ministro*

0570

Dependencia Dirección de Asuntos Jurídicos  
R: DMP/MJBE/ERA E:ERA

San Salvador, 16 de abril de 2010.  
ASUNTO: Resp. Ofi. 230 Ref: 238-UDVOFM-2-2010  
CODIGO: B7D.102

**LICENCIADO  
OSCAR ANTONIO CASTRO RAMIREZ  
JEFE OFICINA FISCAL MORAZÁN.**

Atentamente me refiero a su Oficio N° 230 Ref: 238-UDVOFM-2-2010, de fecha 05 de marzo de 2010, mediante el cual requiere información sobre nómina de Oficiales y Soldados con sus respectivos datos de identificación y domicilio, del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl que se vieron inmersos en el operativo militar realizado durante los días ocho al dieciséis de diciembre de 1981 en el Cantón Cerro Pando de Meanguera, con el objeto de recolectar datos que permitan conocer cuál ha sido el destino de las menores ANA JULIA y CARMELINA MEJIA RAMÍREZ dentro del proceso de investigación SOBREAVERIGUAR el delito de DESAPARICION FORZADA en perjuicio de las menores antes mencionadas, hecho ocurrido el día 13 de diciembre de 1981 en el Cantón Cerro Pando del Municipio de Meanguera, departamento de Morazán.

Sobre el particular me permito informarle que hemos revisado nuestros archivos y no se ha encontrado información alguna sobre la Operación Militar en ese período y en ese lugar, dada la naturaleza y tipo de conflicto desarrollado.

Aprovecho la ocasión para presentarle las muestras de mi consideración.

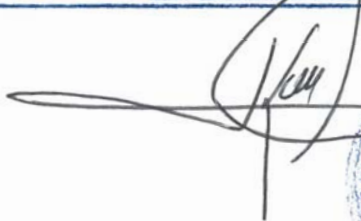
**DIOS UNIÓN LIBERTAD**



**DAVID MUNGUÍA PAYÉS  
GENERAL DE BRIGADA.**

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

LA SUSCRITA NOTARIO, en base al Artículo Treinta y uno de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de uno folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la Ciudad de San Juan a los veintidos días del mes de enero de dos mil catu







MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

*Despacho del Ministro*

0853

DEPENDENCIA. Dirección de Asuntos Jurídicos

Dependencia: Dirección

R. MJBE/E era.

San Salvador, 04 de junio de 2010

ASUNTO: REF.MRRE/DGDH/TDH/1365/2010

CODIGO: B7D. 102



**SEÑOR MINISTRO:**

Atentamente hago referencia a su Oficio MRRE/DGDH/TDH/1365/2010 de fecha 25 de mayo del corriente año, mediante el cual solicita se le informe sobre las medidas tomadas en relación a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hermanas Serrano Cruz.

Sobre el particular, me permito informarle que en esa parte resolutive de lo dispuesto por la Corte IDH, no se contemplan medidas a adoptar por esta Secretaría de Estado, así como también no se ha recibido disposición sobre algún punto en particular que se deba ejecutar. Asimismo me permito informarle que se ha buscado de forma exhaustiva en nuestros registros y no se ha encontrado información relativa al hecho señalado.

Reitero al señor Ministro las muestras de mi consideración y estima.



**DÍOS UNION LIBERTAD**  
**DAVID MUNGUÍA PAYÉS**  
**GENERAL DE BRIGADA**  
**MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL**

**AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ING. HUGO ROGER MARTINEZ BONILLA**  
**E.S.D.O.**



LA SUSCRITA NOTARIO, en base al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de un folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la Ciudad de San Sebastián a los Veintidós días del mes de enero, de dos mil cinco




**RESOLUCIÓN DE LA  
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS\*  
DE 3 DE FEBRERO DE 2010**

**CASO DE LAS HERMANAS SERRANO CRUZ VS. EL SALVADOR**

**SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA**

**VISTO:**

1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante "la Sentencia") dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal") el 1 de marzo de 2005.

2. Las resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Sentencia dictadas por la Corte el 22 de septiembre de 2006 y el 3 de julio de 2007. En esta última, el Tribunal declaró que mantendría abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los siguientes puntos pendientes de acatamiento:

a) investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso, identificar y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de las víctimas, eliminar todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que impidan el cumplimiento de dichas obligaciones en el presente caso, de modo que utilice todas las medidas a su alcance, ya sea por medio del proceso penal o mediante la adopción de otras medidas idóneas y debe divulgar públicamente el resultado del proceso penal (*punto resolutivo sexto de la Sentencia [...]*);

b) funcionamiento de una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto interno y participación de la sociedad civil (*punto resolutivo séptimo de la Sentencia [...]*);

c) crear un sistema de información genética que permita obtener y conservar datos genéticos que coadyuven a la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y sus familiares y su identificación (*punto resolutivo séptimo de la Sentencia [...]*);

---

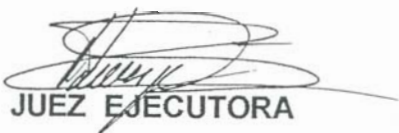
\* El Juez Diego García-Sayán se excusó de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19.2 del Estatuto y 19 del Reglamento de la Corte entonces vigente (actual artículo 21), por lo que no participó en la emisión de la Sentencia ni de la presente Resolución. Por tal motivo el Juez García-Sayán cedió la Presidencia, en los términos del artículo 4.2 del Reglamento, al Vicepresidente del Tribunal, Juez Leonardo A. Franco, Presidente en ejercicio para el presente caso.








En el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, San Salvador, a las diez horas, del día veintinueve de octubre del dos mil dos. Constituida la suscrita JUEZ EJECUTORA, **LICENCIADA MARIA VICTORIA CASAMALHUAPA DE ZELAYA**, asociada de su Secretaria de Actuaciones, **BACHILLER EVA FRANCISCA RIVAS LÓPEZ** con el objeto intimar al actual JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, **General de División Héctor Antonio Gutiérrez Velásquez**, a efecto de darle cumplimiento al **AUTO DE EXHIBICIÓN PERSONAL**, decretado a folio siete de las presentes diligencias, por la SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a favor de **JOSE ADRIAN ROCHAC HERNANDEZ**, leyéndole íntegramente el auto de folios siete al citado funcionario, a fin de que en su caso exhiba la persona del favorecido y muestre el proceso incoado en su contra o manifieste la razón por la cual está restringiéndose su libertad. Consecuente con lo anterior, dicho funcionario **MANIFIESTA**: 1) Que el favorecido no se encuentra privado o restringido de su libertad ambulatoria, en alguna de las Unidades que conforman la Fuerza Armada, por lo que no es posible su exhibición personal y, que no existen investigaciones incoadas en su contra por parte de Autoridades Militares; y 2) Que al revisar los archivos de este Organismo y de las diversas Unidades Militares, no aparecen registros o antecedentes relacionados con la posible restricción o privación de la libertad ambulatoria del favorecido, en el lugar y fecha mencionados en la solicitud de Exhibición Personal o en otras fechas y lugares. No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que firmamos.

  
JUEZ EJECUTORA

  
SECRETARIA DE ACTUACIONES



  
JEFE DEL ESTADO MAYOR  
CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA

LA SUSCRITA NOTARIO, en base al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de uno folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la Ciudad de San Salvador a los veintidós días del mes de enero, de dos mil cinco.


En el MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, San Salvador, a las catorce horas, del día veintinueve de octubre del dos mil dos. Constituida la suscrita JUEZ EJECUTORA, LICENCIADA MARIA VICTORIA CASAMALHUAPA DE ZELAYA, asociada de su Secretaria de Actuaciones, BACHILLER EVA FRANCISCA RIVAS LÓPEZ con el objeto intimar al actual MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL, *General de Aviación Juan Antonio Martínez Varela*, a efecto de darle cumplimiento al **AUTO DE EXHIBICIÓN PERSONAL**, decretado a folio siete de las presentes diligencias, por la SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a favor de **JOSE ADRIAN ROCHAC HERNANDEZ**, leyéndole íntegramente el auto de folios siete al citado funcionario, a fin de que en su caso exhiba la persona del favorecido y muestre el proceso incoado en su contra o manifieste la razón por la cual está restringiéndose su libertad. Consecuente con lo anterior, dicho funcionario **MANIFIESTA**: 1) Que el favorecido no se encuentra privado o restringido de su libertad ambulatoria, en alguna de las Unidades Militares de la Fuerza Armada, por lo que no es posible su exhibición personal y, lógicamente, no existen investigaciones incoadas en su contra por parte de Autoridades Militares; y 2) Que conforme a los archivos de esta Cartera de Estado, no aparecen registros o antecedentes relacionados con la posible restricción o privación de la libertad ambulatoria del favorecido, en la fecha y lugar mencionados en la solicitud de Exhibición Personal o en otras fechas y lugares. No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que firmamos.



  
JUEZ EJECUTORA

  
SECRETARIA DE ACTUACIONES

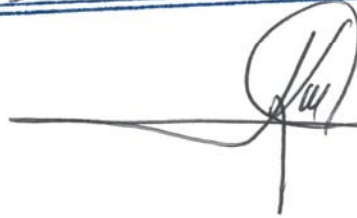


MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

LA SUSCRITA NOTARIO, en base al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de uno folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la Ciudad de San Salvador a los veintinueve días del mes de enero, de dos mil catce


LA SUSCRITA NOTARIO, en base al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de uno folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la Ciudad de San Salvador a los veintidós días del mes de enero de dos mil catu.







En el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, San Salvador, a las once horas del día veinticuatro de octubre del dos mil dos. Constituido el infrascrito JUEZ EJECUTOR, **Bachiller CARLOS ALBERTO PRIETO CUELLAR**, asociado de su Secretario de Actuaciones, **señor JOSÉ LORENZO GALÁN RAMÍREZ**, con el objeto de proceder a intimar al actual JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, **General de División Héctor Antonio Gutiérrez Velásquez**, a efecto de darle cumplimiento al **AUTO DE EXHIBICIÓN PERSONAL**, decretado a folios treinta y seis de las presentes diligencias, por la SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a favor de **SERAPIO CRISTIAN CONTRERAS, JULIA INES CONTRERAS y HERMINIA GREGORIA CONTRERAS**, leyéndole íntegramente el auto de folios treinta y seis al citado funcionario, a fin de que en su caso exhiba las personas de los favorecidos y muestre el proceso incoado en su contra o manifieste la razón por la cual está restringiéndose su libertad. Consecuente con lo anterior, dicho funcionario **MANIFIESTA**: 1) Que ninguno de los favorecidos se encuentra privado o restringido de su libertad ambulatoria, en alguna de las Unidades Militares de la Fuerza Armada, por lo que no es posible su exhibición personal y, lógicamente, no existen investigaciones incoadas en su contra por parte de Autoridades Militares; y 2) Que conforme a los archivos de este Organismo y de las diversas Unidades Militares, no aparecen registros o antecedentes relacionados con posibles restricciones o privaciones de la libertad ambulatoria de los favorecidos, en la fecha y lugar mencionados en la respectiva solicitud de Exhibición Personal o en otras fechas y lugares. No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que firmamos.



JUEZ EJECUTOR

SECRETARIO DE ACTUACIONES

25.10.02


19:10 pm.



JEFE DEL ESTADO MAYOR  
CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA

En el MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día veinticuatro de octubre del dos mil dos. Constituido el infrascrito JUEZ EJECUTOR, **Bachiller CARLOS ALBERTO PRIETO CUELLAR**, asociado de su Secretario de Actuaciones, **señor JOSÉ LORENZO GALÁN RAMÍREZ**, con el objeto de proceder a intimar al actual MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL, **General de Aviación Juan Antonio Martínez Varela**, a efecto de darle cumplimiento al **AUTO DE EXHIBICIÓN PERSONAL**, decretado a folios treinta y seis de las presentes diligencias, por la SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a favor de **SERAPIO CRISTIAN CONTRERAS, JULIA INES CONTRERAS y HERMINIA GREGORIA CONTRERAS**, leyéndole íntegramente el auto de folios treinta y seis al citado funcionario, a fin de que en su caso exhiba las personas de los favorecidos y muestre el proceso incoado en su contra o manifieste la razón por la cual esta restringiéndose su libertad. Consecuente con lo anterior, dicho funcionario **MANIFIESTA**: 1) Que ninguno de los favorecidos se encuentra privado o restringido de su libertad ambulatoria, en alguna de las Unidades Militares de la Fuerza Armada, por lo que no es posible su exhibición personal y, lógicamente, no existen investigaciones incoadas en su contra por parte de Autoridades Militares; y 2) Que conforme a los archivos de este Organismo y de las diversas Unidades Militares, no aparecen registros o antecedentes relacionados con posibles restricciones o privaciones de la libertad ambulatoria de los favorecidos, en la fecha y lugar mencionados en la respectiva solicitud de Exhibición Personal o en otras fechas y lugares. No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que firmamos.



  
JUEZ EJECUTOR

SECRETARIO DE ACTUACIONES

25.10-02  
19:10



MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

LA SUSCRITA NOTARIO, en base al Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: Que la presente fotocopia, que consta de 1 folios, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó. En la Ciudad de San Salvador a los veintidós días del mes de enero de dos mil catce





NUE 71-A-2013 (HF)

**ALVARENGA CHINCHILLA** contra **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Recurso de apelación

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del cinco de mayo de dos mil catorce.

El presente procedimiento de acceso a la información ha sido promovido ante este Instituto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana **MARÍA ESTER ALVARENGA CHINCHILLA**; contra la respuesta a la solicitud de acceso a la información emitida por el Oficial de Información del **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**, en adelante “MDN”, ente obligado a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) representado por su titular.

I. El veintiocho de octubre de dos mil trece las ciudadanas Alvarenga Chinchilla, Ortiz y Zamora Tobar, presentaron solicitud de información ante la Oficina de Información y Respuesta del MDN, que contenía dos apartados, en el primero requirieron el libro de novedades de las siguientes unidades militares: a) Destacamento Militar N° 4, en San Francisco Gotera; b) Destacamento Militar N° 1, de Chalatenango; c) Batallón Atlacatl; d) Quinta brigada de infantería; e) Guardia Nacional de San Marcos Lempa; f) Cuartel central de la Guardia Nacional, en San Salvador; g) Fuerza Aérea y, h) el destacamento militar de Zacatecoluca.

En el segundo apartado, solicitaron *información sobre la captura, traslado, ingreso a bases militares, entrega a la Cruz Roja o cualquier otra persona natural o jurídica, de los siguientes niños y niñas por parte de elementos militares:* a) Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, ambas llevadas por el ejército el 2 de junio de 1982; b) Julia Inés Contreras,

desaparecida en la masacre de la Conacastada, departamento de San Vicente, entre junio y agosto de 1982; c) Ana Julia Portillo Ramírez y Camelia Portillo Ramírez, llevadas por el ejército en el cantón Cerro Pardo, municipio de Meanguera, departamento de Morazán, el 14 de diciembre de 1981; d) Emelinda Lorena Hernández Sánchez, desaparecida por el Batallón Atlacatl, el 11 de diciembre de 1981, en el cantón La Joya, municipio de Meanguera, departamento de Morazán; e) Santo Ernesto Salinas, desaparecido el 25 de octubre de 1982, en el municipio de San Nicolás Lempa; f) Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca, ambos desaparecidos por el ejército, en el desvío los conejos, del cantón San Jacinto la Burrera, municipio de San Esteban Catarina; g) Vilma y Sofía García Cruz, desaparecidas el 4 de junio de 1981, en la finca Peña, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente; h) Ceferino Ruiz Chacón, desaparecido el 4 de junio de 1981, en la finca Peña, municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente; i) José Vicente, Juana Nohemí, Norma, Gladys Zuleyma y Vilma, todos de apellido Rivas, desaparecieron el 14 de junio de 1982 en la masacre de San Juan Buenavista conocida como la Conacastada, departamento de San Vicente; j) José Adrián Rochac, desaparecido el 12 de diciembre de 1981, en el cantón San José Segundo del municipio de San Martín; y k) Boris Napoleón Martínez Cortez, desaparecido el 7 de septiembre de 1980, en el cantón Concepción los Planes, de San Francisco Chinameca, departamento de La Paz.

En ambos casos hicieron notar en su solicitud, que se trataba de información pública relacionada a violaciones graves de derechos fundamentales, por lo que no podría invocarse el carácter de reservada.

El día cuatro de noviembre del corriente año la ciudadana Ortíz, previo requerimiento de subsanación de parte del ente obligado, delimitó la solicitud de información a *todo registro documental del que dispusieran las ocho unidades listadas supra, en los cuales se relacione, ingresos y egresos de personas que fueron capturadas, durante las operaciones militares de contra insurgencia en las zonas rurales, sean adultos, niños o niñas*; aclarando que en las guarniciones militares se llevaba registro diario de las personas que ingresaban, procedentes de las zonas en conflicto, sea que estos registros se denominen, “libros de novedades”, “bitácoras” o cualquier otro nombre; también detalló que la misma se refiere al *período de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1984*. Finalmente

solicitó que se les permitiera consultar directamente las fuentes de la información requerida, en virtud de lo establecido en el Art. 63 de la LAIP.

Tras haberse estipulado el plazo de entrega de información de veinte días hábiles —por tratarse de datos producidos con más de cinco años de antigüedad— la misma fue declarada inexistente, mediante resolución proveída por el Oficial de Información del MDN, a las nueve horas del dos de diciembre de dos mil trece, en la que se alude la realización de una búsqueda exhaustiva dentro de las áreas correspondientes, y la imposibilidad de ubicar la información solicitada.

**II.** Inconforme con la resolución del Oficial de Información, el nueve de diciembre del año pasado, la ciudadana Alvarenga Chinchilla, presentó ante este Instituto recurso de apelación, en el que manifestó, entre otras cosas: a) que considera que la resolución del Oficial de Información del MDN carece de la adecuada motivación, por lo que, no se ha demostrado, razonablemente, la inexistencia de la información solicitada; b) que el MDN, como ente obligado, debe respetar y dar cumplimiento a los derechos desarrollados por la LAIP; y c) solicita tener acceso de forma directa a los libros de registros solicitados, para verificar la información en ellos contenida.

También, la apelante adjuntó al escrito de apelación copia simple de la solicitud de información en formato libre, dirigida conjuntamente a la Oficina de Información y Respuesta del MDN; y, copia simple de la Resolución del Oficial de Información del ente obligado.

**III.** Admitida la apelación, por medio de auto de las nueve horas con quince minutos del seis de enero del corriente año, se solicitó informe al ente obligado, de conformidad con el Art. 88 de la LAIP. En dicho informe, el titular del MDN, en lo medular manifestó que, aunque la solicitud de información fue presentada por varias personas, solo se registró a la señora María Dolores Ortiz, puesto que las otras dos solicitantes no portaban su documento de identidad, por lo que considera que la ciudadana Alvarenga Chinchilla carece de la legitimidad para apelar; también manifestó que se ordenó la búsqueda de la información solicitada al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) y que después de una búsqueda exhaustiva, había sido imposible localizarla, por lo que se declaró inexistente. Al

referido informe se anexó, entre otros documentos: 1) copia certificada de mensaje dirigido al Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, requiriéndole la información solicitada por los ciudadanos, de fecha seis de noviembre de dos mil trece; y, 2) copia certificada de oficio número 1400, remitido por el Jefe del EMCFA al Viceministro de la Defensa Nacional, informando que no se habían encontrado los documentos o registros relacionados a la información solicitada; documentos con los que pretende probar las diligencias realizadas por el MDN, para la búsqueda de la información solicitada, y justificar la resolución correspondiente.

**IV.** La audiencia oral y pública se celebró únicamente con la presencia de la representación del ente obligado, a las nueve horas con treinta minutos del día treinta y uno de enero del corriente año. No se contó con la presencia de la apelante, pese a haber sido notificada en legal forma.

Los representantes del ente obligado manifestaron, esencialmente, que se trata de un caso de inexistencia de la información, que en ocasiones anteriores ya se les han hecho requerimientos de información tendientes a constatar el paradero de personas desaparecidas durante el conflicto armado, de parte de otras instituciones, como el órgano judicial y la Fiscalía General de la República, y que en su momento alegaron la inexistencia de dicha información; que se ha realizado una búsqueda en los archivos correspondientes y que no se le pudo ubicar pese a todos los esfuerzos realizados, pues las operaciones militares a nivel táctico se desarrollaban con lo que se conoce como proceso de conducción de tropas, y de esto no hay evidencia ni registro que pueda ser encontrado; que la presencia de tropas en un lugar no indicaba la ocurrencia de una acción militar determinada, sino que pudo tratarse de patrullajes para mantener la soberanía del territorio; y, que durante el conflicto, la fuerza armada creció exponencialmente, y la conducción de las tropas se realizaba por medio de cartas tácticas, que quedaban en el terreno, de las cuales no se cuenta con registro alguno.

En adición a lo anterior, el MDN, por medio de sus apoderados, también manifestó que no cuenta con información generada antes del año 1988, pues fue en ese año que se reestructuró el EMCFA, antes conocido como Estado Mayor General de la Fuerza Armada, que solo a partir de dicha reestructuración se cuenta con información organizada, lo que dificulta la labor de búsqueda de los documentos solicitados, por lo que sugieren que debe

sentarse el criterio para que, en futuras solicitudes de información, se tome en cuenta dicha inexistencia, para que *in limine* se le haga saber a los ciudadanos tal situación. Además, agregaron que el MDN es una de las instituciones que lleva los archivos de forma más ordenada, y que se sigue un proceso de expurgo de documentos, pero pueden asegurar que los documentos relacionados a la información solicitada no han sido destruidos, sino que de ellos, no quedó registro alguno, de lo que sí se tiene registro, es de las líneas de mando de las unidades correspondientes, las que pueden ser entregadas si se les hace la solicitud correspondiente.

Del mismo modo, ofrecieron como prueba, para demostrar la inexistencia de la información solicitada, y para ser valorada por este Instituto, los siguientes documentos:

A. Copia certificada de los oficios: (i) 2014, de fecha 21 de diciembre de 2009, dirigido al Jefe de la Unidad Fiscal de Morazán; (ii) 570, de fecha 16 de abril de 2010; (iii) 821, de fecha 9 de abril de 2013; y, (iv) 820, de fecha 9 de abril de 2013; todos emitidos por el Ministro de la Defensa Nacional en funciones durante la correspondiente fecha de su emisión, y dirigidos al jefe de la oficina Fiscal de Morazán; en los que se hace constar que no existe información relacionada a nómina de oficiales y soldados, con sus respectivos datos de identificación y domicilio, del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, que participaron en el operativo militar llevado a cabo durante el período comprendido entre el 8 y el 16 de diciembre de 1981, en el cantón la Joya de Meanguera, también conocido como “el Mozote”.

B. Copia certificada de oficio número 858, de fecha 4 de junio de 2010, emitido por el Ministro de la Defensa Nacional, y dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores, en el que se manifiesta que no existe en los registros del MDN, información relacionada con el caso de las hermanas Serrano Cruz, llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en adelante “CrIDH”.

C. Copias certificadas de cuatro actas de intimación, levantadas en el marco de procesos de Habeas Corpus, dos de fecha 24 y dos de fecha 29, todas de octubre del año 2002, en las que se manifiesta que en los archivos del MDN no existe información acerca de Julia Inés Contreras, Herminia Gregoria Contreras y José Adrián Rochac; de quienes también se hace

constar que no se encuentran privados o restringidos de su libertad ambulatoria en ninguna de las unidades que conforman la Fuerza Armada.

V. Antes de proceder con la decisión del caso, es preciso realizar algunas aclaraciones respecto al Derecho de Acceso a la Información Pública —en adelante DAIP— y su indiscutible condición de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión —Art. 6 de la Constitución— que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir información **de toda índole**, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho consagrado en el Art. 85 de la Constitución, que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración.

De esa condición de derecho fundamental se derivan consecuencias tales como: a) la prohibición de alterar su contenido esencial, tanto en su interpretación como en su regulación; b) el reconocimiento de su dimensión objetiva o institucional, con sus implicaciones prestacionales y de garantía; c) la directiva de su armonización, balance o equilibrio con otros derechos en conflicto; y d) el reconocimiento de su fuerza expansiva y optimizadora.

Por otra parte el DAIP, guarda una estrecha relación con el derecho a conocer la verdad, el ejercicio conjunto de estos derechos humanos cobra vital importancia, ante la investigación de probables casos de desaparición forzada de personas, constituyéndose como las herramientas idóneas para el esclarecimiento de los hechos, y el medio primordial que tienen los familiares de las víctimas para satisfacer su necesidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido, como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Narciso González Medina vs. República Dominicana *“con fundamento en estos derechos es posible reconstruir el pasado, reconocer los errores cometidos, reparar a las víctimas y formar una opinión pública vigorosa que contribuya a la recuperación democrática y a la reconstrucción del Estado de Derecho”*.

VI. En cuanto al derecho a conocer la verdad, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido recientemente que el mismo encuentra sustento en los arts. 2 inc. 1º y 6 inc. 1º de la Cn., señalando —en casos como el presente— que la verdad solo es posible si se garantiza a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables,

imparciales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción (sentencia de amparo: 665-2010, del 5-II-2014).

Asimismo, debido a que la libertad de información pretende asegurar la publicación, divulgación o recepción de hechos con relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su existencia, para tomar decisiones libres, el derecho a conocer la verdad implica el libre acceso a información objetiva sobre hechos que hayan vulnerado los derechos fundamentales y a las circunstancias temporales, personales, materiales y territoriales que los rodearon, y por lo tanto implica la posibilidad y la capacidad real de investigar, buscar y recibir información confiable que conduzca al esclarecimiento imparcial y completo de los hechos.

El tribunal constitucional destacó que el Estado se encuentra obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas que le permitan llegar a la verdad de los hechos y, además, reconoció el derecho a conocer la verdad a partir de su doble dimensión: *a)* la individual, que legitima a las personas directa o indirectamente afectadas por la vulneración de sus derechos fundamentales a saber, con independencia del tiempo que haya transcurrido desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo y por qué se produjo, entre otras cosas; y, *b)* la colectiva, en la medida que considera que la sociedad también es titular y tiene el legítimo derecho a conocer la verdad de hechos que hayan vulnerado gravemente los derechos fundamentales de las personas, pues con ello se posibilita la memoria colectiva, la cual permitirá construir un futuro basado en el conocimiento de la verdad, piedra fundamental para evitar nuevas vulneraciones de los derechos fundamentales.

Sobre el particular, la CrIDH en precedentes como *Myrna Mack Chang vs. Guatemala*, 25-XI-2003 y *Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil*, resolvió que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad y por lo tanto, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. El tribunal internacional consideró que el derecho de los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos a conocer la verdad se enmarca en el derecho de acceso a la justicia; la *obligación de investigar* como una forma de reparación, ante la necesidad de remediar la violación del derecho a conocer la



verdad en el caso concreto; y que el derecho a conocer la verdad está relacionado con el acceso a la justicia y el derecho a buscar y recibir información.

Para resolver el caso concreto es necesario, considerar la trascendencia de la información solicitada, en el contexto de hechos ocurridos durante la guerra civil, algunos de ellos investigados como graves violaciones a los derechos humanos en el sistema interamericano de justicia. Dado el papel preponderante del Derecho a Conocer la Verdad y del DAIP en el esclarecimiento de lo ocurrido durante la guerra civil, así como su trascendencia para el régimen de derechos fundamentales; solo a través de su pleno ejercicio, es posible desentrañar lo ocurrido, identificar a los responsables, y disminuir el sufrimiento de los afectados por tales hechos.

En tal sentido la CrIDH, ha resuelto, en importantes precedentes como los casos *Trujillo Oroza Vs. Bolivia* 27-II-2002, y *hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador* 01-III-2005, que el delito de desaparición forzada, constituye una vejación que se mantiene vigente, mientras se le siga privando a las víctimas de su identidad y del contacto con su familia biológica por la falta de cumplimiento del deber estatal de investigar lo sucedido, situación que no afecta únicamente a las víctimas directas, sino que, mientras se desconozca el paradero de éstas, sus familiares son sometidos a un trato cruel, inhumano y degradante. De tal forma que, el mantenimiento de los familiares de las víctimas en la ignorancia, privándolas del acceso a una información valiosa sobre lo ocurrido a sus seres queridos, equivale a mantenerlos en una situación que ha sido equiparada con la tortura, y no admite ningún argumento en contra.

En efecto, en virtud de lo establecido en el Art. 2 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la prohibición de tales conductas es absoluta y no admite excepciones, de tal forma que resultan igualmente graves, las actuaciones de quienes desaparecieron a las víctimas, y las de quienes a través de sus actos u omisiones, contribuyen a la impunidad de aquéllos.

**VII.** Por otra parte, según lo dispuesto en el Art. 2, de la LAIP, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las



instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, en concordancia con el principio de máxima publicidad, consagrado en la letra a del Art. 4 de la misma ley. De estas disposiciones legales se infiere que toda información en poder del Estado se presumirá pública, correspondiéndole a cada ente obligado, demostrar adecuadamente la concurrencia de razones legalmente válidas para restringir el acceso a determinada información.

Al respecto, la CrIDH en el caso *Myrna Mack Chang vs. Guatemala*, antes citado, sostuvo que (...) *En caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación de procesos pendientes (...) Los poderes públicos no pueden escudarse tras el manto protector del secreto de Estado para evitar o dificultar la investigación de ilícitos atribuidos a los miembros de sus propios órganos (...) La decisión de negar el acceso a los archivos militares y de negar la entrega de información jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho [ya que] debe estar sometida a los controles de otros órganos del Estado o de un órgano que garantice el respeto al principio de división de poderes (...) tampoco puede quedar a su discreción la decisión final sobre la existencia de la documentación solicitada*".

De acuerdo con el art. 82 de la LAIP cuando el Oficial de Información "afirme" la inexistencia de la información, el solicitante puede interponer el recurso de apelación ante el Instituto. El art. 73 de la Ley prevé que cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa correspondiente, el Oficial de Información analizará el caso y tomará las medidas pertinentes para localizarla, y en caso de no encontrarla, expedirá una resolución que "confirme" la inexistencia de la información.

En este sentido, el IAIP representa un organismo de control de toda la Administración Pública, incluyendo a los tres órganos fundamentales del Estado, especialmente en lo que atañe a la transparencia de su gestión y el acceso a la información que generan, administran o tienen en su poder, estimulado por medio del ejercicio democrático de la participación ciudadana en los asuntos de interés público. De ese modo, debe reconocerse no solo la fuerza

vinculante de las resoluciones que emite el Instituto, sino su carácter mediático que ayuda a formar una opinión pública vigorosa que contribuye a establecer un Estado Democrático de Derecho.

Dicho lo anterior, es importante resaltar que las resoluciones del Instituto deben fundamentarse en los hechos probados y las razones legales procedentes; las pruebas aportadas en el proceso serán apreciadas de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 90 de la LAIP). Este sistema de valoración de las pruebas consiste en analizarlas en su conjunto y no solo individualmente, conforme a las máximas de la experiencia, la lógica, el correcto entendimiento humano y el conocimiento científico, mediante el cual se asigna a cada medio probatorio un determinado valor o se indican las razones por las que no se les otorga valor alguno, pudiendo aun -en ausencia de ellos- otorgarse valor a los indicios dimanantes de la conducta procesal de las partes.

No debe menospreciarse la relevancia de los hechos pertinentes a este caso, propios de una de las etapas más oscuras de nuestro pasado reciente, por lo que su conocimiento detallado, debe pasar a formar parte de la memoria histórica de nuestro pueblo, como garantía de no repetición de tales hechos. Hay que valorar primordialmente que, los hechos sobre los que se solicita información, ocurrieron en el marco de la guerra civil, de la cual, evidentemente la Fuerza Armada, fue uno de los actores principales, y como ente estatal involucrado, estaba obligado al resguardo de todo documento con valor histórico generado en tal contexto.

Asimismo debe destacarse el valor y la fuerza de las resoluciones expedidas por este Instituto, como órgano garante del DAIP en El Salvador, que puede conocer directa o indirectamente a través de un procedimiento administrativo de acceso a la información sobre la vulneración de derechos humanos, sin reemplazar la competencia judicial, aunque sí complementarla.

**VIII.** Ahora bien, debe recordarse que, tratándose de información de trascendencia para el ámbito de los derechos humanos, la sociedad en conjunto, y especialmente las víctimas o sus familiares, tienen derecho a ser informados de todo lo sucedido al respecto; por lo tanto en casos como el presente —como lo ha manifestado la CIDH en el caso Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil— el DAIP no se satisface con la mera

declaratoria de inexistencia de la información, sino que, se establecen una serie de obligaciones estatales, a favor de los solicitantes, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del derecho.

En primer lugar es obligación del Estado, realizar de buena fe todas las diligencias necesarias para ubicar físicamente la información solicitada, encargándose de documentar la realización de una búsqueda seria y eficaz, no solo en los archivos de las unidades militares sino también, en donde quiera que pueda encontrarse indicio alguno de la existencia de tal información.

Al respecto, el Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad, de la Organización de las Naciones Unidas establece que los Estados tienen el *deber de preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario*, incluyendo los archivos de: a) organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan desempeñado una función importante en relación con las violaciones de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías de policía, que hayan participado en violaciones de los derechos humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina del fiscal y el poder judicial, que participan en la protección de los derechos humanos; y, d) materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros órganos de investigación. Por lo tanto, y atendiendo a lo establecido en los Art. 68 y 69 de la LAIP, es obligación de los Oficiales de Información, realizar todas las diligencias correspondientes para ubicar la información solicitada, y de ser el caso que esta se encuentre en poder de otra entidad, también es su obligación orientar al solicitante para que dirija su petición correctamente, a la institución que posea la información requerida.

Por otra parte, debemos recordar que una de las principales consecuencias derivadas del Principio de Máxima Publicidad —consagrado en el Art. 4, en concordancia a lo establecido en el Art. 65, ambos de la LAIP— consiste en que la carga de la prueba, en caso de establecer limitaciones al DAIP, corresponde al ente obligado; como lo determinó la CrIDH en la sentencia definitiva del caso Claude Reyes Vs. Chile *lo anterior permite generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en control del Estado debe evitarse al máximo la actuación discrecional y*

*arbitraria del mismo en el establecimiento de restricciones al derecho.* En tal sentido, será el ente obligado, quien deba fundamentar adecuadamente la resolución donde se declare inexistente la información solicitada, aportando todos los elementos que hayan conducido a tal resolución.

En segundo lugar, si una vez realizada una búsqueda diligente de la información, esta resultara infructífera, siempre que se compruebe —y documente— la inexistencia de la información, le corresponde a la dependencia estatal, la obligación de realizar indagaciones que permitan esclarecer los hechos objeto de investigación; como ya lo ha determinado la CrIDH en la sentencia definitiva del caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil *[e]n todo caso, cuando la respuesta al solicitante sea que la información es inexistente, el Estado debe indicar todas las actuaciones adelantadas para intentar recuperarla o reconstruirla.* En concordancia con lo estipulado por la Comisión interamericana de Derechos Humanos, en el Informe de 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde se establece que *el Estado tiene la obligación de producir, recuperar, reconstruir o captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por normas internacionales, constitucionales o legales. En este sentido, por ejemplo, si una información que debía custodiar fue destruida o ilegalmente sustraída, y la misma era necesaria para esclarecer violaciones de derechos humanos, el Estado debe adelantar, de buena fe, todos los esfuerzos a su alcance para recuperar o reconstruir dicha información* (el resaltado es proveído).

En adición a lo anteriormente expuesto, la actividad del ente obligado debe estar dirigida a recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a la información solicitada, si es que esta fue destruida, o, de quienes participaron —en todos los niveles— en las operaciones o los hechos que son objeto de investigación.

Finalmente, en concordancia al contenido del informe de 2011 de la relatoría especial de la OEA sobre libertad de expresión, también es obligación de la Administración, poner a disposición de los solicitantes los documentos donde consten los inventarios de los archivos estatales correspondientes, además de permitir el acceso al recinto donde se albergan, para verificar efectivamente si la información es inexistente, y corroborar las diligencias de búsqueda de la información realizadas por el ente obligado; puesto que —según se estipula

en el Marco Jurídico Interamericano sobre Derecho al Acceso a la Información, párrafo 81— la satisfacción de este derecho *implica también la posibilidad de acceder a los lugares físicos donde se encuentra la información, gracias a lo cual es posible conocer los criterios de clasificación de la respectiva oficina.*

IX. Los apoderados del MDN, han sostenido que la ciudadana María Ester Alvarenga Chinchilla, no se encuentra legitimada para iniciar el presente proceso de acceso a la información, en virtud de que, en sus registros internos solo se consignó la información de la ciudadana María Dolores Ortiz, como solicitante, debido a que, según manifiestan, al momento de interponer la solicitud de información ella era la única que portaba su documento de identificación.

Al respecto cabe aclarar que, como consta a folio nueve del presente expediente, se encuentra agregada constancia de recepción de la solicitud de información, realizada por la apelante de forma conjunta con las ciudadanas Marina Dolores Ortiz y María Margarita Zamora Tobar, en la que se estampó el sello de la Unidad de Acceso a la Información del MDN, y consta su recepción por parte de la señorita Carolina Abrego, el día 28 de octubre de 2013.

Este Instituto es de la opinión que, habiendo sido presentada la solicitud de información de forma conjunta, y teniendo constancia de su recepción, se le habilita el derecho a interponer el recurso de apelación a todas las solicitantes, aun cuando lo hagan separadamente, pues la facultad para recurrir de un acto, no puede depender de la misma entidad contra la que se recurre, es decir el hecho de que el Oficial de Información del MND, no haya hecho constar en sus registros a todas las solicitantes, no puede ser alegado posteriormente por ellos mismos, como causa de improcedencia del recurso.

X. En el caso en estudio, la parte apelante no ofreció prueba alguna relativa al fondo del asunto, más allá de la que contiene el expediente administrativo correspondiente, no obstante lo anterior, debe recordarse que en el recurso de apelación, los particulares nada tienen que probar en cuanto a la naturaleza pública de una información solicitada pues, en virtud del principio de “máxima publicidad” consagrado en la letra “a” del Art. 4 de la LAIP, se impone a los entes obligados la carga o el deber de aportar prueba sobre las excepciones establecidas por la ley para denegar el acceso a la información solicitada por los ciudadanos, debiéndose entender, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 2 de la LAIP que, toda

información en poder de los entes obligados se presume pública, mientras no se demuestre, por parte de éstos, que concurre alguna de las causas legalmente establecidas para restringir su divulgación, lo mismo que cuando afirman su inexistencia; en cuyo caso, los sujetos obligados tienen el deber de acreditar fehacientemente en el expediente, que han realizado una búsqueda exhaustiva y diligente de la misma, lo que incluye, pero no se limita a, relacionar los inventarios de los archivos correspondientes y detallar las actuaciones o procedimientos seguidos para localizar, recuperar y reconstruir la información, según sea el caso.

Por su parte los apoderados del MDN, manifestaron en reiteradas ocasiones que representan a una institución que cuenta con archivos organizados, pero que no posee información anterior al año 1988, ofreciendo como prueba documental la agregada al expediente administrativo, en el cual consta el oficio código B3. 1 – 070, de fecha 6 de noviembre de 2013, suscrito por el Viceministro de la Defensa Nacional, Jaime Leonardo Parada González, dirigido al jefe del EMCFA, requiriéndole el envío de la información solicitada por la ciudadana Alvarenga Chinchilla; asimismo consta en el referido expediente administrativo, el oficio de respuesta N° 1440, de fecha 16 de noviembre de 2013, suscrito por el Jefe del EMCFA, General de División, Rafael Melara Rivera, en el que informa al Viceministro de la Defensa Nacional, General de Aviación, Jaime Leonardo Parada González, que (...) *se realizó una búsqueda exhaustiva en los registros que lleva este Organismo, y Unidades Militares supuestamente involucradas, de cuyo resultado se ha podido establecer que no se encuentra ningún documento o registro relacionado a las supuestas capturas a que hace referencia el requerimiento (...).*

De igual forma, los documentos ofrecidos por el ente obligado, durante la audiencia oral, demuestran la negación reiterada acerca de la existencia de todo documento relacionado con la desaparición de algunos de los niños y las niñas, sobre los que la ciudadana Alvarenga Chinchilla solicitó información, haciendo alusión de manera repetitiva, a la realización de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de la institución castrense, sin que esta les condujera a resultados favorables.

No obstante lo anterior, los apoderados del MDN, no ofrecieron durante el presente procedimiento, ninguna elemento probatorio que documentara la efectiva realización de



dicha búsqueda, ni los procedimientos empleados para tal efecto. En el presente expediente no consta ningún documento que pueda servir para corroborar las acciones, supuestamente llevadas a cabo por el ente obligado, para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información de la solicitante, más allá del mero dicho de sus representantes, reflejado en las consultas internas.

Este Instituto considera, como ya se ha sostenido con anterioridad, que el MDN no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documentos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existe. Resulta esencial que, para garantizar el DAIP, las instituciones públicas actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos. Alegar la falta de prueba sobre la existencia de información, sin haber indicado, al menos, cuáles fueron las diligencias que realizó para confirmar o no su existencia, posibilita la actuación discrecional y arbitraria de los entes obligados de facilitar o no determinada información, lo que genera inseguridad jurídica a los ciudadanos respecto al ejercicio de este derecho y a conocer la verdad de lo ocurrido.

Este Instituto, ha sostenido que una mera alegación se vuelve insuficiente para dar por sentado un hecho, es necesario sustentar adecuadamente una resolución, según se establece en el artículo 72 de la LAIP, acompañando la afirmación con actividades probatorias encaminadas a crear una convicción acerca de la justificación de la denegatoria del acceso a la información; dicho en otras palabras, no basta con alegar que la información solicitada fue buscada, para probar su inexistencia, es obligación del MDN, demostrarla valiéndose de los medios probatorios idóneos, que dejen constancia de los procedimientos seguidos, y los resultados obtenidos. En el caso en particular, el ente obligado no ha demostrado la inexistencia de la documentación solicitada y tampoco demostró que sus agentes no estuviesen involucrados en lo sucedido y por lo tanto, en principio, debe presumirse que al menos en sus unidades militares fue generada la información requerida.

En consecuencia, el MDN debe permitir el acceso personal a los archivos o lugares físicos donde se podría encontrar la información solicitada, no solo a las víctimas y sus familiares, sino también a este Instituto cuando conozca de los recursos de apelación, medida que ha sido recomendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe de 2011 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en cuanto es obligación del Estado poner a disposición de los solicitantes los documentos donde consten los inventarios y archivos correspondientes, y permitir el acceso al recinto donde se albergan, para verificar efectivamente si la información es inexistente y corroborar las diligencias de búsqueda de la información realizadas.

XI. Este Instituto siguiendo la jurisprudencia de la CrIDH en el caso *Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil*, ya ha establecido que el DAIP no se satisface con la mera declaratoria de inexistencia de una información, sino que el Estado debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas a favor de los solicitantes, para asegurar el pleno cumplimiento del derecho. En ese orden de ideas, estimamos que, inicialmente el MDN tiene la obligación de realizar de buena fe todas las diligencias necesarias para ubicar físicamente la información solicitada, encargándose de documentar la realización de una búsqueda seria y eficaz, no solo en los archivos de las unidades militares, sino también en cualquier parte en que pueda encontrarse indicio alguno, no solo de la existencia de tal información, sino, primordialmente, del paradero de las personas sobre las que se ha solicitado información.

Ello es conforme con lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe de 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde se dispone que el Estado tiene la obligación de producir, recuperar, reconstruir o captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido por normas internacionales, constitucionales o legales. De ahí que, por ejemplo, si una información que debía custodiar fue destruida o ilegalmente sustraída, y la misma era necesaria para esclarecer violaciones de derechos humanos, el Estado debe adelantar, de buena fe, todos los esfuerzos a su alcance para recuperar o reconstruir dicha información.

XI. Especial consideración merece el hecho de que, si bien es cierto, la solicitud de información de la ciudadana Alvarenga Chinchilla, versaba sobre hechos específicos, con lugares, personas y espacios de tiempo relativamente bien determinados, no se limita



únicamente a éstos datos, sino que también se requerían documentos relativos a determinadas unidades militares relacionadas en el romano I de esta resolución, descritos como *todo registro documental que dispusieran de las ocho unidades listadas supra, en los cuales se relacione ingresos y egresos de personas que fueron capturados durante las operaciones militares de contrainsurgencia en las zonas rurales, sean adultos, niños y niñas. En las guarniciones militares mencionadas, se llevaba registro diario de las personas (adultos, niños y niñas) que ingresabas procedentes de las zonas en conflicto, sea que éstos se denominen "libros de novedades", "bitácoras", o cualquier otro nombre (...); a la vez que solicita la consulta directa de tales documentos.*

Debe tomarse en cuenta que, como ya se mencionó antes, es obligación del MDN, conservar todo documento, generado por sus actividades, que pudiera estar relacionado con graves violaciones a derechos humanos, así como lo es también, para todo ente estatal conservar cualquier archivo oficial que pueda contener valor histórico, en virtud de lo dispuesto en los Arts. 2 y 3 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, debe conservarse todo documento concerniente a bienes relacionados a la historia, incluida la historia militar, y en general toda clase de archivo oficial.

El MDN, al declarar inexistente toda la información solicitada, está manifestando que carece de todo registro o control de ingreso a las instalaciones de las unidades mencionadas, sin determinar ni justificar, si se carece de estos registros porque fueron destruidos, porque no se resguardaron con el debido cuidado, o porque nunca existieron.

Si bien es cierto que el MDN no ha negado la realización de los hechos sobre los que se solicitó información, aun cuando durante la audiencia oral, se refirieron a las personas afectadas como las "*supuestas víctimas*", no han cuestionado abiertamente su existencia; sin embargo, han mantenido la postura de que carecen de todo registro de tales acontecimientos; en este sentido, ya que no se ha demostrado que dichos documentos hayan sido destruidos a través de medios legítimos, debe presumirse que existen en poder del ente obligado, pues no resulta lógico pensar que, tratándose de hechos de tal relevancia, una institución como el MDN, no haya tomado las providencias necesarias para su resguardo, o haya decidido deshacerse de ellos ignorando todo registro o proceso archivístico; en cuyo caso deberán determinarse las responsabilidades correspondientes.

**XII.** Por lo tanto, este Instituto en concordancia con el criterio asentado en la resolución definitiva del caso 67 – A – 2013, considera que, los entes obligado a la LAIP no puede negar el acceso a la información necesaria para la tutela judicial o administrativa de derechos fundamentales, así como las informaciones o documentos que versen sobre conductas que impliquen o tenga especial trascendencia para el establecimiento de violaciones a derechos humanos, como son los hechos ocurridos durante la guerra civil, practicadas por agentes públicos o mandatos de autoridades públicas, tampoco pueden ser objeto de restricción de acceso.

El DAIP se erige como una valiosa herramienta, un instrumento útil y un “derecho-llave” que permite, hoy en día, especialmente a las víctimas y a los familiares de estas, y a la ciudadanía, en general, ser titulares indiscutibles del derecho a solicitar, acceder y recibir información completa, fidedigna y veraz de los archivos del MDN, así como de cualquier otra institución del Estado, para poder cuestionar e indagar sobre los hechos de la historia nacional que permitan arribar al conocimiento de la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.

La satisfacción de este derecho implica también la posibilidad de acceder a los lugares físicos donde se encuentra la información, gracias a lo cual es posible conocer los criterios de clasificación de la respectiva oficina o corroborar la inexistencia de la misma. Mientras tanto, el derecho a conocer la verdad supone la facultad de solicitar y obtener información sobre las circunstancias y motivos por los que se perpetraron los hechos lesivos de derechos fundamentales. En torno a ello existen obligaciones específicas del Estado, a través de los entes obligados, que no solo consisten en facilitar el acceso a los familiares a la documentación que se encuentra bajo control oficial, sino también en la asunción de las tareas de investigación y corroboración de los hechos denunciados.

Dado que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, este Instituto considera que el MDN debe realizar, de buena fe, todas las acciones que sean necesarias para buscar, sistematizar y publicar la información relacionada con las operaciones militares durante la guerra civil, que estén orientadas a la determinación de la verdad y a reparar a las víctimas, así como a los

familiares de estas, por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en esa época.

De ahí que este Instituto, conforme a lo anteriormente expuesto, considera procedente ordenar al MDN que ejecute diligencias encaminadas a **recuperar o reconstruir la información solicitada**, siendo que el mismo estaba obligado a su resguardo, las cuales incluyen, pero no se limitan a: (i) realizar nuevamente la búsqueda de la información solicitada por la apelante, incluyendo esta vez todos los archivos de las unidades militares detalladas en la solicitud de información, y en todos los archivos de las unidades que pudieron estar involucradas en las áreas geográficas indicadas, durante los períodos de tiempo señalados, debiendo, además, dejar constancia fehaciente de los procedimientos empleados para tal efecto y justificar debidamente los resultados obtenidos; (ii) recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a la información solicitada o de quienes participaron —en todos los niveles— en los hechos alegados; (iii) entregar a la apelante una copia certificada de los instrumentos de consulta, con los que organiza los archivos correspondientes, ya sean inventarios, catálogos, índices, guías de consulta u otros análogos; (iv) permitir el más amplio acceso de la apelante, así como a los investigadores y archivólogos que ella designe, a los archivos y registros que llevan las unidades militares correspondientes, a fin de que puedan constatar los procedimientos realizados en la búsqueda de la información, y corroborar si efectivamente existe o no; y (v) comprobar debidamente la destrucción de documentos oficiales e investigar judicialmente esa destrucción a fin de que los responsables puedan ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados.

En virtud del art. 58 letra b. de la LAIP, con el fin de garantizar el debido ejercicio del DAIP, este Instituto verificará de manera directa e inmediata el cumplimiento de todo lo ordenado en esta resolución, bajo pena de iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente ante su eventual incumplimiento.


**POR TANTO**, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y arts. 6 y 18 de la Cn., 52 inc. 3º, 58 letras a., b., c. y d., 94, 96 letra d. y 102 de la LAIP, y 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, este Instituto **RESUELVE**:

a) *Revóquese* la resolución del Oficial de Información del Ministerio de la Defensa Nacional, emitida a las nueve horas del día dos de diciembre de dos mil trece, por no estar apegada a derecho;

b) *Ordénese* al Ministro de la Defensa Nacional que, dentro del **plazo de dos meses calendario** contados a partir de la notificación de esta resolución ejecute diligencias encaminadas a **recuperar o reconstruir la información solicitada**, las cuales incluyen, pero no se limitan a: (i) realizar nuevamente la búsqueda de la información solicitada por la apelante, incluyendo esta vez todos los archivos correspondientes a las siguientes unidades militares: Destacamento Militar N° 4, en San Francisco Gotera; Destacamento Militar N° 1, de Chalatenango; Batallón Atlacatl; Quinta Brigada de infantería; Guardia Nacional de San Marcos Lempa; Guardia Nacional del Cuartel Central, en San Salvador; la Fuerza Aérea; y, el Destacamento militar de Zacatecoluca; así como todos los demás archivos de las unidades militares que pudieron estar involucradas en las áreas geográficas indicadas, durante los períodos de tiempo señalados, debiendo, además, dejar constancia fehaciente de los procedimientos empleados para tal efecto y justificar debidamente los resultados obtenidos. También deberá incluir toda información relacionada con la captura, traslado, ingreso a bases militares, entrega a la Cruz Roja o cualquier otra persona natural o jurídica de los niños y niñas detallados en la solicitud de información presentada por la apelante; (ii) recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a la información solicitada o de quienes participaron —en todos los niveles— en los hechos alegados; (iii) entregar a la apelante una copia certificada de los instrumentos de consulta, con los que organiza los archivos correspondientes, ya sean inventarios, catálogos, índices, guías de consulta u otros análogos ; (iv) permitir el más amplio acceso de la apelante, así como a los investigadores y archivólogos que ella designe, a los archivos y registros que llevan las unidades militares correspondientes, a fin de que puedan constatar los procedimientos realizados en la búsqueda de la información, y corroborar si efectivamente existen o no; y (v) comprobar debidamente la destrucción de documentos oficiales e investigar judicialmente esa destrucción a fin de que los responsables puedan ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados.

c) *Publíquese* esta resolución, oportunamente;

*Hágase saber.*



**PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LO SUSCRIBEN**

RV



## INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### ESQUELA NOTIFICACIÓN

El infrascrito notificador Milton Edgardo Hernández Gómez  
del Instituto de Acceso a la Información Pública.

HACE CONSTAR: que a las 09 horas con 00 minutos del día  
08 del mes de mayo del año dos mil catorce, se procedió a  
notificar en legal forma a Joel Antonio River Moreno  
en su calidad de Oficial de Información del Min. de la Defensa Nacional  
la resolución de referencia 71-A-2013, de las 09 horas  
con 30 minutos del día 05 del mes de  
mayo del año dos mil catorce, en su despacho oficial, ubicado en  
Min. de la Defensa Nacional, Km 5½, Carretera a Santa  
Tecla, San Salvador,  
la cual fue recibida por Juan Ulises Artero  
quien se identifica con su  
Documento Único de Identidad número \_\_\_\_\_, cuyo  
cargo es Jefe de la CIR-MDN.

  
Firma de quien la recibe

  
Firma del Notificador







**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**ESQUELA NOTIFICACIÓN**

El infrascrito notificador Milton Edgardo Hernández Gómez  
del Instituto de Acceso a la Información Pública.

HACE CONSTAR: que a las 09 horas con 01 minutos del día  
08 del mes de mayo del año dos mil catorce, se procedió a  
notificar en legal forma a Rene Arnaldo Castellón Mejía  
en su calidad de Apoderado Especial del Min. de la Defensa Nacional  
la resolución de referencia 71-A-2013 de las 09 horas  
con 30 minutos del día 05 del mes de  
mayo del año dos mil catorce, en su despacho oficial, ubicado en  
Min. de la Defensa Nacional, Km. 5 1/2, Carretera a Santa  
Tecla, San Salvador.

la cual fue recibida por Juan Ulises Artero  
quien se identifica con su  
Documento Único de Identidad número 22222222, cuyo  
cargo es Jefe de la CIR-MDU.

  
Firma de quien la recibe

  
Firma del Notificador







## NOTIFICACIÓN NUE 71-A-2013 Resolución definitiva

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

8 de mayo de 2014, 10:25

Para:

Sra. María Ester Alvarenga Chinchilla  
Presente.

A través de este medio, se le adjunta resolución definitiva referente al caso NUE 71-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibido.


Milton Hernández  
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2517-2080

 **NUE 71-A-2013 Resolución definitiva (Ciudadana).pdf**  
4426K

8 de mayo de 2014, 11:26

Responder a:

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Comunicación recibida, muchas gracias.

[El texto citado está oculto]



**HONORABLES SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

**RENÉ ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA**, de generales conocidas en el presente recurso de apelación instruido en contra del Ministerio de la Defensa Nacional (en lo sucesivo MDN, en razón de la petición de información y apelación incoada por la ciudadana **MARÍA ESTER ALVARENGA CHINCHILLA** (que en lo sucesivo se denominará como "la ciudadana y/o apelante"), a Ustedes con todo respeto expongo que:

He sido notificado de la resolución de las nueve horas y treinta minutos del cinco mayo de dos mil catorce, efectivamente notificada el día ocho de mayo del año que prosigue, en donde a partir de la petición de información incoada por la apelante consistente en *los libros de novedades de las siguientes unidades militares: a) Destacamento Militar Número Cuatro, en San Francisco Gotera; b) Destacamento Militar Número Uno, de Chalatenango; c) Batallón Atlacatl; d) Quinta Brigada de Infantería; e) Guardia Nacional de San Marcos Lempa; f) Cuartel General de la Guardia Nacional, en San Salvador; g) Fuerza Aérea y, h) el Destacamento Militar de Zacatecoluca; así como, información sobre captura, traslado, ingresos a bases militares, entrega a la Cruz Roja o cualquier otra persona natural o jurídica, de los siguientes niños y niñas por parte de elementos militares: a) Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, ambas por el Ejército el 2 de junio de 1982; b) Julia Inés Contreras, desaparecidas en la masacre de la Conacastada, Departamento de San Vicente, entre junio y agosto de 1982; c) Ana Julia Portillo Ramírez y Camelia Portillo Ramírez, llevadas por el Ejército en el cantón Cerro Pando, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán, el 14 de diciembre de 1981; d) Emelinda Lorena Hernández Sánchez, desaparecida por el Batallón Atlacatl, el 11 de diciembre de 1981, en el cantón La Joya, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán; e) Santos Ernesto Salinas, desaparecido el 25 de octubre de 1982, en el Municipio de San Nicolás Lempa; f) Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca; ambos desaparecidos por el Ejército, en el desvío Los Conejos, del cantón San Jacinto La Burrera, Municipio de San Esteban Catarina; g) Vilma y Sofía García Cruz, desaparecidas el 4 de junio de 1981, en la finca Peña, Municipio de Toluca, Departamento de San Vicente; i) José Vicente, Juana Nohemí, Norma, Gladys Zuleyma y Vilma, todos de apellidos Rivas, desaparecidas el 14 de junio de 1982 en la masacre de San Juan Buenavista conocida como la Conacastada, Departamento de San Vicente; j) José Adrián Rochac, desaparecidas el 12 de diciembre de 1981, en el cantón San José Segundo del Municipio de San Martín; y k) Boris Napoleón Martínez Cortez, desaparecidos el 7 de septiembre de 1980, en el cantón Concepción Los Planes, de San Francisco Chinameca, Departamento de La Paz.* En cuyo sentido, los Comisionados ilegalmente resolvieron revocar la resolución de Oficial de Información



del Ministerio de la Defensa Nacional y ordenan al señor Ministro de la Defensa Nacional a ejecutar diligencias encaminadas a *"recuperar o reconstruir la información"* información solicitada por la ciudadana; para lo cual, en la resolución de mérito enumeraron un conjunto de acciones fuera de las competencias atribuidas a esa autoridad estatal.

Con la finalidad de dar cumplimiento con el principio de definitividad, y con precisas instrucciones del señor Ministro de la Defensa Nacional, vengo a interponer recurso de revocatoria del acto administrativo emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (en adelante IAIP) provisto mediante resolución de las nueve horas y treinta minutos del cinco de mayo del dos mil catorce.

Para mantener un orden lógico en la exposición de los motivos de ilegalidad que este Ministerio considera atinentes al caso: I) Se harán algunas consideraciones en relación a las vulnerabilidades efectuadas por ese IAIP al principio de legalidad de la Administración Pública, para luego II) Señalar las incongruencias al principio de verdad material, contradicción y aportación de pruebas dentro del procedimiento de apelación.

#### **I. VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.**

En este apartado corresponde referirse a los elementos jurídicos relacionados al principio de legalidad; para lo cual, se adecuaran los aspectos inter-contextuales de las transgresiones efectuadas por ese IAIP, y los conceptos concretos de vulneración cuya génesis vienen vinculadas al citado principio de vinculación positiva a todos los funcionarios de la Administración Pública, siendo patente iniciar la argumentación con el siguiente orden a efecto que esa autoridad – bajo el principio de eventualidad - se pronuncie individualmente por cada uno de ellos:

***a) Transgresión al principio de legalidad por falta de legitimación activa de la apelante al interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, comprendidos en los artículos 66 LAIP, y 52, 53 y 55 del Reglamento de la Ley.***

Llama poderosamente la atención, la falta de legitimación activa de la ciudadana **MARÍA ESTER ALVARENGA CHINCHILLA**, quien interpuso el recurso de apelación ante ese IAIP; sobre este hecho es importante mencionar el argumento que presenta ese IAIP: *"...como consta a folio nueve del presente expediente, se encuentra agregada constancia de recepción de la solicitud de información, realizada por la apelante de forma conjunta con las ciudadanas María Dolores Ortiz y María Margarita Zamora Tobar, en la que estampó el sello de la Unidad de Acceso a la información del MDN..."* (Párrafo 3, Pág. 13 de la resolución impugnada), de referida situación se tiene la declaración jurada de la señorita Nayla Carolina Abrego, quién se desempeña como secretaria en la Oficina de Información y Respuesta del

Ministerio de la Defensa Nacional (OIR-MDN), que en lo medular expresa: "...Que al ver la solicitud se les pidió el Documento Único de Identidad (DUI) a cada ciudadana; ante lo cual, solamente la señora Marina Dolores Ortiz lo portaba únicamente, dándose cuenta de esta situación el señor Oficial de Información, en ese momento me dijo: "Carolina, firme de recibido" y a la vez el señor Cnel. Rivas Moreno les explicó, que por el motivo que la señora Dolores Ortiz, era la única de las peticionarias que portaba DUI, a ella se le haría la constancia de recepción de la solicitud libre, en donde quedaría el nombre de ella como peticionaria..."

En ese sentido, se verifica a través de la señorita Nayla Carolina Abrego Serrano, que firmo la solicitud de información, con instrucciones del señor Oficial de Información, pero que el Oficial de Información del MDN, les aclaró a las señoras María Margarita Zamora Tobar y María Ester Alvarenga Chinchilla, que la constancia de recepción de la solicitud se le haría a la ciudadana **MARINA DOLORES ORTIZ**, por ser la única de las peticionarias que portaba DUI, siendo ella la que aparece en las constancias de recepción de la solicitud N° B3.1-015-060 de fechas 28 de octubre del 2013, y de esta forma cumplir con recepción de la solicitud, de conformidad al Art. 66 inciso 3° LAIP y a los Arts. 52 y 53 de su Reglamento; no obstante, la admisibilidad de la solicitud, quedo sujeta a la petición de subsanación que realizó el Oficial de Información del MDN, ese mismo día 28 de octubre del 2013, a la señora Dolores Ortiz, quien responde el día 4 de noviembre del 2013, y conforme a lo establecido en el Art. 54 del Reglamento de la LAIP, se da por subsanado la información que se requiere y el Oficial de información emite nueva constancia de recepción de la solicitud, con fecha 2 de diciembre del 2013; la cual, se lleva a cabo a través de la resolución de respuesta N° B3.1-015-060/04NOV013 y dirigida a la ciudadana MARINA DOLORES ORTIZ.

De todo el proceso explicado anteriormente se puede establecer que la apelante no cumplió con lo establecido en la LAIP y su Reglamento ningún documento va dirigido a la apelante, ya que para el Oficial de Información, no es la solicitante y/o peticionaria y por ende no tiene la legitimación activa, que ostenta la señora Dolores Ortiz ; en ese sentido, la apelante nunca cumplió con la obligación de acreditar su identidad , cuando en realidad lo único que hicieron las tres ciudadanas en mención es suscribir la solicitud presentada a la Unidad de Acceso a la Información del MDN, de fecha 28 de octubre del 2013, pero en la constancia de recepción de la solicitud, solo aparece la señora Marina Dolores Ortiz. No obstante ese LAIP, establece el siguiente precedente administrativo: "...habiendo sido presentada la solicitud de información de forma conjunta, y teniendo constancia de su recepción, se le habilita el derecho a interponer el recurso de apelación a todas las solicitantes, aun cuando lo hagan separadamente, pues la faculta para recurrir de un acto..." (Párrafo 4, Pág. 13 de la resolución impugnada), sentando un hecho que



constituye una evidente vulneración al principio de legalidad en la aplicación del Art. 66 de la LAIP y Arts. 52, 53 y 54 de su reglamento.

**b) *Violación al principio de legalidad por el exceso de la competencia del LAIP para ordenar al ente obligado a recuperar o reconstruir la información solicitada por la peticionaria, en contravención a lo dispuesto en el artículo 58, 66 inciso 3º, y 96 LAIP.***

La doctrina coincide en señalar que la competencia es un elemento intrínseco a la naturaleza de los órganos, entes e instituciones del poder público, en tanto que en términos muy elementales, puede definirse como la medida de la capacidad de cada órgano y también como el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano, y que uno y otros están autorizados y obligados a ejercitar<sup>1</sup>. Concretamente, Roberto Dromi la define como *"...la esfera de atribuciones de los entes y los órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente..."*<sup>2</sup>.

En ese mismo sentido, resulta ilustrativo lo dicho por la Sala de lo Constitucional en cuanto a la competencia de la Administración Pública en tanto que: *"... desde el punto de vista técnico - jurídico y con carácter orgánico, el concepto de atribución o competencia puede entenderse como la capacidad concreta que tiene un determinado ente estatal de suerte que al margen de la materia específica asignada no puede desenvolver su actividad; mientras que desde un carácter sistemático, la atribución o competencia consiste en la enumeración de una serie de posibilidades de actuación dadas a un órgano por razón de los asuntos que están atribuidos de un modo específico. Así, una atribución puede identificarse como la acción o actividad inherente que por mandato constitucional o legal desarrolla un órgano estatal o ente público; es decir, los poderes, atribuciones y facultades conferidas para el normal funcionamiento y cumplimiento de una labor..."*<sup>3</sup>.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que la competencia constituye un elemento esencial de todo acto administrativo, y debe ser entendida como la medida de la potestad que corresponde a cada órgano. Como elemento esencial de la configuración del acto administrativo, *la competencia condiciona necesariamente la validez del mismo*. Y es que, la competencia es en todo caso una determinación normativa; que siempre debe encontrar su fundamento en una norma jurídica. Pues en resumidas cuentas, es el ordenamiento jurídico el que sustenta las actuaciones de la Administración mediante la atribución de

<sup>1</sup> Cfr. Parada. Ramón. "Derecho Administrativo", Tomo II, Decimocuarta edición, Marcial Pons, Madrid. 2000. Pág. 54.

<sup>2</sup> Dromi. José Roberto. "Derecho Administrativo, séptima edición actualizada". Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1998. Pág. 76.

<sup>3</sup> Sentencia definitiva de inconstitucionalidad de las ocho horas y veinte minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil uno, con número de referencia 33-37-2000AC.



potestades habilitantes para desplegar sus efectos ante los administrados; por lo que el acto administrativo requiere de una cobertura legal, o sea, la existencia de una potestad que otorgue competencia al órgano funcionario emisor<sup>4</sup>.

En ese orden de ideas, la competencia se vincula directamente al principio de legalidad en cuanto que sus efectos derivan de la vinculación positiva que expone el Art. 86 de la Constitución (CN), según el cual los entes públicos únicamente pueden hacer los que la norma jurídica les permite, en tanto que a las personas naturales, conforme al Art. 8 CN, "*Todo lo que no les está prohibido por la norma les está permitido*", a partir de su vinculación negativa con la ley. De ahí que, para los entes del Estado la competencia, además de estar atribuida expresamente y aunque en su órbita puedan existir atribuciones discrecionales en un marco legal, es obligatorio su ejercicio<sup>5</sup>.

Para dar contexto a los elementos de la vulneración realizados por ese IAIP, en primer lugar debe señalarse que los decisiones de la entidad llamada a velar por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP (Art. 58 letra "a") ha de basarse en el marco legal vigente a sus funciones. En ese sentido, los ejercicios de replicar, equiparar, asemejar u homologar las competencias atribuidas a Tribunales Constitucionales o Cortes Internacionales en materia de Derechos Humanos se consideran una innecesaria superabundancia normativa que puede contrarrestar y apartar la verdadera finalidad y eficacia tras el derecho de acceso a la información pública.

Precisamente, porque el examen de la normativa de acceso a la información debe enfocarse en la medida de las atribuciones dispuestas por la ley a ese Instituto. De ahí que, si esa autoridad administrativa juzga en base al estándar de los que los otros países puedan considerar jurídicamente correcto pierde el sentido del control legal de sus resoluciones al hacer suyos contextos diferentes, impropios y apartados de la realidad nacional, lo que supone cierta arbitrariedad en el empleo de tales materialidades. Sobre este punto, debe dejarse claro que el MDN no pretende ocultar u obstruir el acceso a la información pública sobre libros de novedades y/o bitácoras de unidades militares [Destacamentos N° 1 y 4, BIRI "ATLACATL", 5ª BGDA. INF., GN San Marcos Lempa y Cuartel Central de San Salvador; Fuerza Aérea y Destacamento Militar de Zacatecoluca] e información acerca de niños y niñas desaparecidos, relacionados a la épocas del conflicto armado interno; por lo cual, resulta impropio e innecesario que se antagonice la búsqueda de dicha documentación en los archivos de la institución. Y es que, durante todo el transcurso de esta apelación se ha sostenido – consistentemente -

<sup>4</sup> Cfr. Sentencia definitiva del proceso contencioso administrativo con número de referencia 45-I-2000.

<sup>5</sup> Cfr. Sentencia definitiva de inconstitucionalidad de las diez horas y treinta y cinco minutos del veintiocho de marzo de dos mil seis, en el procedimiento con número de referencia 2-2005.

que la información de los libros o bitácoras y registros de las personas solicitadas por la peticionaria son **"INEXISTENTES"**; es decir, no sean destruido, ni tampoco han sido clasificados de secretos, reservados o confidenciales, como fueron declarados en los objetos de los procedimientos tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) en los casos Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, y Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil; Claude Reyes Vs. Chile; asimismo, en los argumentos retomados por el IAIP en los casos Narciso González Medina Vs. República Dominicana; Trujillo Oroza Vs. Bolivia; Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador; aduciendo que el MDN, como parte del Estado es responsable de la investigación de las supuestas desapariciones de los niños y niñas del conflicto interno, cuando en realidad su responsabilidad radica en proporcionar información, pero que tampoco significa que se deba de inventar, con el solo fin de satisfacer la pretensión de terceros, o que ejecute acciones que invadan la jurisdicción y competencia que le corresponde a otra instancia gubernamental; para el caso de El Salvador, le corresponde a la Fiscalía General de la República, llevar a cabo todas las diligencias que puedan subsanar la inexistencia de información, pero ese IAIP fundamentado en una interpretación errónea del principio de máxima publicidad, le sirve de base, para introducir los argumentos aludidos en la resolución impugnada.

Ese desencaje en el contexto de los precedentes de la CIDH retomados por el IAIP, vuelve arbitrariamente lúgubres el papel de la Fuerza Armada y Cuerpo de Seguridad Pública en el conflicto interno de El Salvador. En esa perspectiva, sin una investigación y adecuación histórica apropiada sobre el particular, como más adelante se analizará, el IAIP incumple el deber de buscar la verdad material en sus resoluciones administrativas; mermando contra sí mismo la legalidad, legitimidad, claridad y contexto histórico de sus productos normativos al referirse a hechos que han transcurrido más de treinta años, como si estos hubiesen ocurrido recientemente.

Por ello, esos autos - asimilaciones de competencias realizadas a partir de una extensa paráfrasis, sin ningún análisis formal de competencias funcionales, constituye un exceso indebido en los límites de las atribuciones conferidas al IAIP enmarcadas en el artículo 58 de la ley de la materia.

Asimismo, debe señalarse con mayor envergadura el exceso del Instituto al ordenar al titular al MDN a que en el plazo de dos meses calendario, ejecute medidas encaminadas a **"recuperar o reconstruir la información solicitada"** por la apelante, que no está legítimamente acreditada. Este punto debe abordarse a partir de la competencia de la Administración como elemento de la validez del acto administrativo. Resultan evidentes, las competencias que tiene el Instituto al resolver los procedimientos de apelación acorde al artículo 96 LAIP. En tal sentido, a esa

entidad solo le es permitido: a) Desestimar el recurso por improcedente o sobreseerlo; b) Confirmar la decisión impugnada del Oficial de Información; c) Confirmar la inexistencia de la información pública solicitada; d) Revocar o modificar las decisiones del Oficial de Información y ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información solicitada o los datos personales, que reclasifique la información, o bien, que modifique tales datos y; e) Establecer sanciones o requerir el trámite de la imposición de las mismas a las autoridades respectivas.

Como puede evidenciarse del artículo reseñado, el Instituto no tiene la competencia para ordenar a un servidor público a recuperar o reconstruir la información solicitada; en tanto ***no posee cobertura legal para apartarse del cauce de competencias atribuidas por el legislador***. En este punto debe subrayarse, la trascendencia de la vulneración al principio de legalidad en cuanto ese IAIP se arrogó una competencia más allá del contenido de la LAIP. Y es que, como ya se mencionó, esa autoridad no puede equiparar la eficacia de sus resoluciones fuera de lo permitido de la ley o pretender que su marco de actuaciones tutele judicialmente contenidos más allá al derecho de acceso a la información pública.

Aunado a lo anterior, el MDN no está obligado a lo imposible en tanto ya existe una doble verificación dentro de la institución de la inexistencia de la información y resulta irrazonable reconstruir o recuperar las horas de los ingresos y egresos de personas que fueron capturadas durante las operaciones militares de contrainsurgencias en las zonas rurales, sean adultos, niños y niñas; así como, la elaboración de libros que posean referida información de entrada y salida de población civil; ya que tal reconstrucción, significaría contradecir el principio de integridad de la información (Art. 4 letra "d" LAIP), el cual exige a la Administración Pública que la información pública debe ser completa, fidedigna y veraz.

Por los motivos expuestos, se solicita a ese Instituto revocar la resolución impugnada en cuanto a la falta de competencia, investigación y errores de interpretación en el contenido de la LAIP; en vulneración al principio de legalidad de la administración.

## **II. CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL, CONTRADICCIÓN Y APORTACIÓN DE PRUEBA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN.**

### ***a) Contravención al principio de verdad material.***

Otros de los principios que rige la actuación de la Administración Pública es el de la verdad material. A partir de este principio se impone la carga a las diferentes instancias del Estado de dar primacía a la verdad material frente a la verdad formal; eso quiere significar que, existe un deber de esclarecimiento con un

criterio de amplitud con respecto a las alegaciones y afirmaciones realizadas por las partes dentro de cualquier procedimiento. De ahí que, se imponga la inherente obligación de adecuar sus actos administrativos a hechos y conducentes a la realidad.

Coincidente con esa definición, la Sala de lo Contencioso Administrativo<sup>6</sup> refiriéndose a este principio ha sostenido que: *“...toda decisión de la Administración Pública, debe ser regida por uno de sus principios preliminares que es el de la verdad material; según el principio de la verdad material, las autoridades deben resolver en base a hechos reales, más allá de los que hayan sido alegados y probados por el interesado. Sobre dicho principio, el Dr. Agustín Gordillo manifiesta que, el principio de la verdad material implica que la Administración tiene el derecho y el deber de reunir toda la prueba relativa al conocimiento real de los hechos sobre los cuales se debe resolver...”*.

Durante todo el procedimiento administrativo tramitado ante ese Instituto, incuestionablemente, se evidencia el favorecimiento y parcialidad de ese IAIP, hacia la supuesta apelante, ya que no asistió a la audiencia oral, demostrando una falta de respeto hacia ese instituto y renunciando al derecho que le asiste a presentar pruebas y sus respectivos alegatos, que de alguna manera justificará su falta de legitimación activa, y que expresará su satisfacción o falta de credibilidad a la prueba y alegatos presentados por el MDN, que estaban encaminados a probar la inexistencia de la información y ratificar que el MDN no se le está negando deliberadamente a entregar la información pedida por la ciudadana María Dolores Ortiz.

Es importante hacer notar que ese IAIP, se refiere a la “Verdad Material” como una responsabilidad exclusiva del Estado, y en el caso en comento para la Fuerza Armada de El Salvador, en el contexto de las supuestas violaciones a derechos humanos, de hechos ocurridos en el conflicto interno; no obstante, la verdad material, resulta de la investigación y el conocimiento de diversas aristas, que al tomarlas en consideración permite la toma de decisiones más cercana a la realidad; es decir, requiere de la participación de otras instituciones que tienen competencia sobre estos presuntos hechos.

Nótese, por esa autoridad administrativa que este MDN ha cumplido, previo a la existencia y funcionamiento de ese Instituto, de órdenes emanadas por la Sala de lo Constitucional de la exhibición de algunos de los archivos institucionales castrenses a causa de procedimiento constitucionales tales como el de habeas corpus. Asimismo las pruebas y alegatos presentados por el MDN sobre la inexistencia de la información a otras instancias gubernamentales anteriores al IAIP,

---

<sup>6</sup> Sentencia definitiva de las diez horas y treinta minutos del uno de marzo de 2007, en el proceso con número de referencia 463-2007.

a pesar de haber sido expuestas en la audiencia oral del caso, no fueron tomadas en cuenta por ese Instituto al momento de emitir el acto administrativo impugnado; lo cual contraviene el principio de verdad material en la resolución del caso.

**b) Aportación de pruebas dentro del procedimiento de apelación.**

En virtud del principio de verdad material, se incorpora al procedimiento las actas elaboradas por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) y Unidades Militares (FAS, 5ª BGDA. INF. y DM-4), en donde describen el procedimiento ejecutado, la persona encargada y las autoridades que supervisaron la búsqueda exhaustiva de la información solicitada por la señora Marina Dolores Ortiz y que la supuesta apelante manifiesta que carece de la adecuada motivación, por lo que no sea demostrado razonablemente su inexistencia; aunado al argumento precedente, el Instituto ha sostenido que el MDN no argumentó cuales fueron las diligencias que realizó para confirmar o no la existencia de la información, lo cual – a criterio del IAIP- posibilita la actuación discrecional y arbitraria de los entes obligados de facilitar o no determinada información, lo que genera inseguridad jurídica a los ciudadanos respecto al ejercicio del derecho de acceso y a conocer la verdad de lo ocurrido. En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 LAIP en relación con el artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil, siendo este un nuevo elemento traído a colación por esa autoridad, resulta pertinente controvertir las afirmaciones del IAIP con la presentación de las actas de las unidades militares que fue requerida la búsqueda, en donde describen las fechas, los procedimientos, lugares y parámetros de búsqueda de la información, que sustenta la resolución de respuesta N° B3.1-015-060/04NOV013.

Por los motivos expuestos, y la documentación aportada, resulta procedente que ese Instituto revoque la resolución impugnada; al haberse presentado elementos suficientes que botan la "presunción" argüida por ese IAIP en relación a la generación de la información y los defectos en su búsqueda".

Finalmente, es importante subrayar la jurisprudencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo que acoge la idea del procedimiento contencioso subjetivo o de plena jurisdicción en donde los procesos que se ventilan ante esa Sala constituyen auténticos procesos de contención, en donde es posible alegar y controvertir plenamente los hechos acaecidos en sede administrativa y aquéllos exógenos cuya conexión al objeto del litigio proyectan sus efectos dentro del proceso de formación de las actuaciones de la Administración Pública. Así, (...) *la Jurisdicción Contencioso Administrativo no es únicamente un mero revisor de lo actuado en sede administrativo, sino que en ella se origina un verdadero proceso, instituido en los*



postulados del principio de economía procesal y tutela judicial efectiva; y superando las posturas del carácter revisor de esta Sala"<sup>7</sup>.

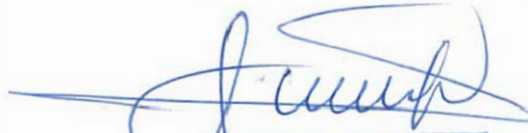
Con base a todos los elementos antes argüidos, a ustedes PIDO:

I. Se admita el presente escrito; junto con la declaración jurada de la señorita NAYLA CAROLINA FERNANDEZ SERRANO y las actas del procedimiento de búsqueda ejecutado por el EMCFA, FAS, 5ª BGDA. INF. y DM-4.


II. Se tenga por interpuesto el recurso de revocatoria contra el acto administrativo impugnado en este acto.

III. Se revoque en todas sus partes la resolución de las nueve horas y treinta minutos del día cinco de mayo de dos mil catorce; y en su lugar se dicte la que según derecho corresponda.

San Salvador, trece de mayo de dos mil catorce.

  
LIC. RENE ARNALDO CASTELLON MEJIA  
ABOGADO



Presentado por	<u>Maria Eugenia Castellon Gomez</u>		
Quién se identifica con	<u>Acta de Búsqueda</u>	a las	<u>13:35</u> horas
del	<u>13</u>	de	<u>5</u> de 20 <u>14</u> Junto con <u>5 fotos</u>
			



<sup>7</sup> Sentencia definitiva de lo Contencioso Administrativo de las catorce horas y treinta y siete minutos del quince de diciembre de dos mil nueve, con número de referencia 228-2006.

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día doce de mayo de dos mil catorce. Ante mí, **YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ SERRANO**, Notario del domicilio de San Salvador, comparece la señorita **NAYLA CAROLINA ABREGO SERRANO**, de xxxxxxxxxxxx de edad, estudiante, del domicilio de xxxxxxxx departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y ME DICE: I. Que labora en el Ministerio de la Defensa Nacional, con el cargo de secretaria de la Oficina de Información y Respuesta (OIR-MDN); II. Que aproximadamente a las once horas y treinta minutos del día veintiocho de octubre, reunidos el señor Cnel. Joel Antonio Rivas Moreno, Oficial de Información de la OIR-MDN; las señoras: Marina Dolores Ortiz, María Margarita Zamora Tobar y María Ester Alvarenga Chinchilla, y la suscrita; con el propósito que las ciudadanas en referencia deseaban presentar solicitud libre información relacionada con los libros de novedades de diferentes unidades militares e información sobre la supuesta captura, traslado ingreso a bases militares, entrega a la Cruz Roja o cualquier otra persona natural o jurídica, de los niños y niñas por parte de elementos militares durante el conflicto armada; III. Que al ver la solicitud se les pidió el Documento Único de Identidad (DUI) a cada ciudadana; ante lo cual, solamente la señora Marina Dolores Ortiz lo portaba únicamente, dándose cuenta de esta situación el señor Oficial de Información, en ese momento me dijo: "Carolina, firme de recibido." y a la vez el señor Cnel. Rivas Moreno les explicó, que por el motivo que la señora Dolores Ortiz, era la única de las peticionarias que portaba DUI, a ella se le haría la constancia de recepción de la solicitud libre, en donde quedaría el nombre de ella como peticionaria; IV. Que posteriormente fue enviado por correo electrónico a la señora Marina Dolores Ortiz, el comprobante de inicio del trámite acordando la fecha de entrega según la LAIP, era para el día veinticinco de noviembre del año recién pasado; pero el día treinta de octubre del dos mil trece, por instrucciones del Oficial de Información se envía requerimiento de subsanación a la señora Dolores Ortiz, siendo contestado por la solicitante el día cuatro de noviembre del dos mil trece, e inmediatamente el señor Oficial Información me ordena elaborar la nueva constancia de recepción de la información a la señora Dolores Ortiz, quien habiendo subsanado, se le envía al correo electrónico xxxxxxxxxx la constancia de recepción con fecha cuatro de noviembre del dos mil trece, en donde quedó plasmado nueva fecha de entrega de información para el día dos de diciembre del dos mil trece. Yo, el suscrito Notario Doy Fe, que explique a la compareciente los efectos legales de la presente acta notarial, escrita en una hoja útil, y leída que le fue por mí, en un solo acto ininterrumpido, ratifica su contenido y firma de conmigo. DOY FE.








En el Archivo General del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, San Salvador a las diecisiete horas con treinta minutos del día nueve de mayo de dos mil catorce, reunidos los señores Cnel. Art. DEM Rafael Ernesto Flores, Jefe del C-I "Personal", del Estado Mayor conjunto de la Fuerza Armada, Myr. Trans. Kelvin Alfredo Vásquez Mejía, Jefe del Departamento de Archivo General del C-I "Personal" del Estado Mayor conjunto de la Fuerza Armada, señora Krissia Adlyd Tenorio Franco y señor Guadalupe Adalberto Cortez, como especialistas del Departamento antes mencionado, con el fin de dar respuesta a memorándum numero tres cero seis uno/DALO de fecha nueve de mayo del corriente año, procedente del C-VIII "Asuntos Jurídicos" del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, mediante el cual solicitan al C-I "Personal" de este Organismo, información relacionada a personal desaparecido entre las fechas cero uno de enero de mil novecientos ochenta, al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, a petición de la ciudadana María Dolores Ortiz de la ONG PRO-BUSQUEDA, en la documentación que poseemos desde el mes de enero de mil novecientos ochenta hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, procediendo a las trece horas del día nueve de mayo del año dos mil catorce a realizar una revisión exhaustiva en la documentación que se posee en la estantería bajo custodia en este Archivo, correspondientes al año de mil novecientos ochenta, hasta el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, no siendo posible encontrar registros referente a la información solicitada, señalando la inexistencia específica de la información requerida. No habiendo mas que hacer constar, y para constancia firmamos la presente.

  
KRISSIA ADLYD TENORIO FRANCO  
ESPECIALISTA EN ARCHIVO

  
GUADALUPE ADALBERTO CORTEZ  
ESPECIALISTA EN ARCHIVO

  
KELVIN ALFREDO VÁSQUEZ MEJÍA  
MYR. TRANS.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL

  
Vo. Bo.  
RAFAEL ERNESTO FLORES  
CNEL. ART. DEM  
JEFE DEL C-I "PERSONAL"



En el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Ilopango, a las diez horas y cuarenta minutos del día diez de mayo del año dos mil catorce, presentes en este acto el señor GRAL. BGDA. AÉREA CARLOS JAIME MENA TORRES como Jefe del EMGFA, el señor CNEL. PA. DEM. RAYMUNDO EDUARDO TORRUELLA RICO quien desempeña el cargo de Jefe del Depto. A-I/EMGFA, el señor STTE. Y LIC. WILLIAN ERNESTO FLORES PEREZ quien se desempeña como Asesor Jurídico del EMGFA y el señor CABO ADMINISTRATIVO JUAN FRANCISCO VASQUEZ GARCIA en su función como Técnico Archivista del EMGFA, reunidos todos, a efecto de verificar el procedimiento utilizado para la búsqueda en los archivos del EMGFA, sobre la información requerida mediante mensaje numero 594 C-VIII/DLAL procedente del EMCFA el día 11NOV013, en el cual se solicitaba la búsqueda en cualquier registro documental que hiciera referencia a las supuestas capturas, traslados, ingresos a bases militares, entrega a la Cruz Roja o a cualquier otra persona natural o jurídica de personas durante las operaciones militares de contrainsurgencia realizadas en el Conflicto Armado, por lo tanto dicho procedimiento se detalló de la siguiente manera:

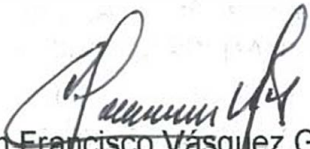
1.- Se emitió la orden de búsqueda al señor CABO ADMINISTRATIVO JUAN FRANCISCO VASQUEZ GARCIA, quien es el Técnico Archivista del EMGFA.

2.- Se hizo uso de la base de datos del Sistema Integrado del Archivo del EMGFA.

3.- El señor CABO ADMINISTRATIVO JUAN FRANCISCO VASQUEZ GARCIA, realizo la búsqueda en forma física de la información requerida, en todos los documentos existentes en el archivo del EMGFA.

4.- El señor CABO ADMINISTRATIVO JUAN FRANCISCO VASQUEZ, informo al Depto. A-I del EMGFA, que no se encontró ningún tipo de información relacionada a lo requerido en el mensaje numero 594 C-VIII/DLAL de fecha 11NOV013 procedente del EMCFA, por lo que se informó a dicha superioridad sobre tal situación mediante mensaje numero 0189 JEFATURA/EMGFA de fecha 14NOV013.

Después de haberse expuesto el procedimiento utilizado para la búsqueda de dicha información, se comprobó si realmente ese es el procedimiento normal de búsqueda, el cual efectivamente es el correcto, no existiendo ningún tipo de ilegalidad en el procedimiento establecido y no habiendo nada más que hacer constar, firmamos la presente.

  
Juan Francisco Vasquez García  
Cabo Administrativo  
Técnico Archivista del EMGFA.

  
  
William Ernesto Flores Pérez  
Snte. y Lic.  
Asesor Jurídico del EMGFA.

  
  
Raymundo Eduardo Torruella Rico  
Cnel. PA. DEM.  
Jefe del Depto. A-I/EMGFA.


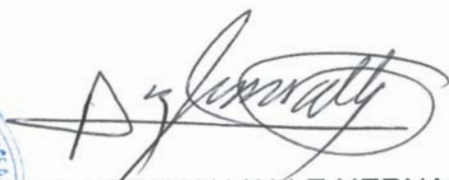
  
  
Carlos Jaime Mena Torres  
General de Brigada Aérea  
Jefe del EMGFA.

En la Oficina del Departamento I "Personal", de la Quinta Brigada de Infantería, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de mayo del año dos mil catorce, reunidos los señores Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Pompilio Hernán Valle Hernández, Jefe del Departamento I "Personal" de la 5ª Brigada de Infantería, Licenciada Carolina Yaneth Montoya Serpas, Asesora Jurídica de la 5ª Brigada de Infantería y Cabo Jonny Rolin Díaz Munguía, Colaborador del D-I "Personal", con el fin de dar respuesta a requerimiento solicitado por el Señor Jefe del EMCFA, en mensaje No. 3027 C-VIII/DALAO, de fecha 09MAY014, en relación a información solicitada por la Ciudadana María Dolores Ortiz, de la ONG PRO-BUSQUEDA, contenida en mensaje No. 594 C-VIII/DLAL, de fecha 11NOV013, realizando las acciones siguientes: **UNO.-** Se buscó minuciosamente, en los archivos correspondientes en el periodo desde 1980 hasta 1985, dentro de los cuales no se encontró información sobre la desaparición de los menores Julia Inés Contreras, de 8 meses de edad, Manuel Antonio Bonilla Osorio de 9 años de edad, Vilma García Cruz y Sofía García Cruz la primera de 5 años y la segunda de 6 años de edad, Ceferino Ruiz Chacón de 45 días de nacido, José Vicente de 11 años, Juana Nohemí de 10 años, Norma de 7 años, Gladys Zuleyma de 6 años y Vilma de 8 años, todas de apellido Rivas. **DOS.-** Se le ordeno al Ssgto. Juan Antonio Tenorio Rivas, colaborador del D-I "Personal", coordinar con el Técnico de Archivo para buscar en los documentos bajo custodia del Archivo Central la información solicitada según mensaje No. 594. **TRES.-** Los días 12 y 13NOV013, se cotejaron los documentos para verificar si existía información, revisándose los documentos siguientes: **a.-** Libro de novedades del señor Comandante de Guardia, de los años 1980- 1985. **b.-** Libro de novedades y partes del señor Capitán de Cuartel, de los años 1980- 1985. **c.-** Radiocomunicaciones de entrada y de salida, de los años 1980-1985, no habiendo encontrado registros de lo solicitado, **CUATRO.-** El 14NOV013, se informó al EMGE, por medio de mensaje No. 1318 D-I "PERSONAL, que no se encontró información relacionada del personal desaparecido; después de haber revisado toda la documentación antes descrita, se da fe que no se encontró información relacionada a la solicitud hecha por la Ciudadana María Dolores Ortiz de la ONG PRO-BUSQUEDA.



Y no habiendo más nada que hacer constar a la presente acta, se da por terminada la cual para dejar constancia firmamos.

  
JONNY ROLIN DIAZ MUNGUIA  
CABO COLABORADOR DEL D-I

  
  
CAROLINA YANETH MONTOYA SERPAS  
ASESORA JURIDICA

  
  
POMPILO HERNAN VALLE HERNANDEZ  
TCNEL. INF. DEM  
JEFE DEL D-I "PERSONAL" DE LA 5ª BGDA. INF

  
  
JOSE GILBERTO JOMA RIVERA  
CNEL. INF. DEM  
EJECUTIVO Y JEM DE LA 5ª BGDA. INF.

  
  
CARLOS BENNING RIVAS MARTINEZ  
CNEL. INF. DEM  
CMTE. DE LA 5ª ZONA MILITAR, CMTE. DE LA 5ª BRIGADA DE INF.  
Y COMANDANTE DEPARTAMENTAL DE SAN VICENTE





## FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR DESTACAMENTO MILITAR N° 4.

En la sala de Planes del Destacamento Militar Número Cuatro, San Francisco Gotera, Morazan, a las quince horas del día nueve del mes de mayo del año dos mil catorce, reunidos los señores, Cnel. Inf. DEM Fidel Armando Ramos Rivera, Cap. Inf. Mario Ernesto Arenivar Navarrete, Sgto. Myr. Noé Medrano Carbajal, Cabo Vicente Antonio Pérez Hernández, integrantes de la Comisión de Vigencia, Retención y Eliminación de Documentos, para dar respuesta a mensaje N° 3027 C-VIII/DALAO, de fecha 09MAY014, donde ordena remitir acta que establezca los pormenores de búsqueda que se ejecutó en el Archivo Central de esta unidad militar, en relación a mensaje N° 594, C-VIII/DLAL.- de fecha 11NOV013, donde solicitaban información relacionada a personal desaparecido entre las fechas de 01ENE980 al 31DIC984, a petición de la ciudadana María Dolores Ortiz, de la ONG PRO-BUSQUEDA, en donde se recibió en la S-1 "Personal" a las 080012NOV013, procediendo a la búsqueda el personal que labora en la Oficina de la S-1 "Personal" en el Área de DLO, juntamente con el Especialista en Archivo, el día 12; 13 y 14NOV013; habiéndose realizado una revisión exhaustiva en los libros de novedades desde enero de 1980 hasta 31DIC984, en donde no fue posible encontrar registros de novedades sobre personal desaparecido, u otro documento relacionado a ingresos de personas que fueran capturadas durante las operaciones militares en las zona rurales, la Comisión de Vigencia, Retención y Eliminación de Documentos, señalo la inexistencia de dicha información en los registros de los archivos de gestión en esta unidad militar, verificando que ha mencionado requerimiento se le dio respuesta en su oportunidad por la administración anterior mediante mensaje N° 919 S-1 "PERSONAL/DLO", fecha 14NOV013.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta la que para constancia firmamos.



FIDEL ARMANDO RAMOS RIVERA  
CNEL. INF. DEM  
PDTE. DE LA CVRED



MARIO ERNESTO ARENIVAR NAVARRETE  
CAP. INF.  
VICEPRESIDENTE DE LA CVRED



NOÉ MEDRANO CARBAJAL  
SGTO. MYR  
ASESOR JURIDICO DEL DM-4.

VICENTE ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ  
CABO  
ESPECIALISTA EN ARCHIVO



JOSÉ MAURICIO VILLACORTA RIVAS  
CNEL. ART. DEM  
CMTE. DEL DM-4. Y CMTE. DPTAL. DE MORAZAN





NUE 71-A-2013 (HF)

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del veintiséis de mayo de dos mil catorce.

Por recibido el recurso de Revocatoria interpuesto por el **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**, por medio de su apoderado especial licenciado René Arnoldo Castellón Mejía, el día 13 de mayo de los corrientes, por medio del cual pretende impugnar la resolución emitida por este Instituto a las nueve horas con treinta minutos del 5 de mayo del presente año.

Visto el contenido del mismo, y habiéndose interpuesto en tiempo, de conformidad con los Arts. 95 y 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública; y Arts. 503, 504 y 505 del Código Procesal Civil y Mercantil, este Instituto **RESUELVE:**

a) *Admitase* el presente recurso de revocatoria;

b) *Córrase* traslado a la ciudadana **MARÍA ESTER ALVARENGA CHINCHILLA** para que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, se pronuncie respecto de la revocatoria interpuesta.

*Notifíquese.-*



**PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN**  
RV



## INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### ESQUELA NOTIFICACIÓN

El infrascrito notificador Milton Edgardo Hernández Gómez  
del Instituto de Acceso a la Información Pública.

HACE CONSTAR: que a las 15 horas con 29 minutos del día  
18 del mes de junio del año dos mil catorce, se procedió a  
notificar en legal forma a René Arnaldo Castellón Mejía  
en su calidad de Apoderado Especial del Ministro de la Defensa Nacional  
la resolución de referencia NUE 71-A-2013, de las 09 horas  
con 10 minutos del día 26 del mes de  
mayo del año dos mil catorce, en su despacho oficial, ubicado en  
Ministerio de la Defensa Nacional, Km 5 1/2, Carretera a  
Santa Tecla, San Salvador,  
la cual fue recibida por Cárolina Abrego  
\_\_\_\_\_ , quien se identifica con su

Documento Único de Identidad número \_\_\_\_\_ cuyo  
cargo es Secretaria CIR-MDN.

  
Firma de quien la recibe



  
Firma del Notificador







## NOTIFICACIÓN NUE 71-A-2013 Admisión de revocatoria

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

18 de junio de 2014, 16:05

Sra. María Ester Alvarenga Chinchilla  
Presente.

A través de este medio, se le adjunta auto de admisión de recurso de revocatoria y documentación anexa referente al caso NUE 71-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Cordialmente,

Milton Hernández  
**Notificador IAIP.-**


INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia


Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2205-3800

### 3 archivos adjuntos

 **NUE 71-A-2013 Admisión de revocatoria (Ciudadana).pdf**  
574K

 **NUE 71-A-2013 Escrito de revocatoria.pdf**  
5182K

 **NUE 71-A-2013 Documentación anexa.pdf**  
1568K

**Ester Alvarenga**

18 de junio de 2014, 18:21

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Muchas gracias por la información que acuso de recibido  
Fraternalmente  
Ester

Date: Wed, 18 Jun 2014 16:05:19 -0600

Subject: NOTIFICACIÓN NUE 71-A-2013 Admisión de revocatoria

From: notificaciones.iaip@gmail.com



San Salvador, 23 de junio de 2014.

**Señores comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.**

**Yo, MARÍA ESTER ALVARENGA CHINCHILLA**, de generales conocidas en el presente proceso, en atención al recurso de revocatoria presentado por el Licenciado RENÉ ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA, en representación del Ministerio de la Defensa Nacional, quien fundamenta su recurso en dos supuestas infracciones incurridas por el Honorable Instituto de Acceso a la Información Pública, en su resolución de fecha cinco de mayo de dos mil catorce; considero necesario contestar respecto de los alegatos referidos.

**I. Respecto al Principio de Legalidad de la Administración Pública aludidas.**

El recurrente alega, que desde un principio, la solicitud de acceso a la información pública que fue presentada, estaba suscrita por tres ciudadanas, y que la misma fue admitida únicamente en nombre de una, pero si, el impetrante conoció alguna deficiencia formal en el escrito de la solicitud de acceso a la información pública, apegado a un estricto esquema de legalidad, debió advertirlo en el acto previo a la admisión, a través de una resolución que ordenara su subsanación o bien declararlo inadmisibile.

Dado que si la Administración Pública convalidó tácitamente la supuesta deficiencia por no encausarla en el momento procesal oportuno, no puede a esta altura del procedimiento, venir a invocar en su favor, un vicio del que tuvo conocimiento desde el principio, sin que con ello atente al principio de Buena Fe procesal y a la Seguridad Jurídica.

En tal sentido, me considero legitimada para haber impetrado el recurso de apelación cuya resolución definitiva hoy se cuestiona.

**II. Respecto a la falta de competencia para proveer la resolución que manda a “recuperar o reconstruir la información”**

De acuerdo al artículo 96 literal D de la LAIP, considero que, dentro de la facultad de ordenar que se permita el acceso, es por lógica, competencia de éste instituto, ordenar también, que se disponga de toda la información a la que se pide tener acceso.

Tal como se argumenta en éste procedimiento, si la información ha sido destruida o la misma no logra ser ubicada, de acuerdo al artículo 58 literal J, es el IAIP, quien determina los lineamientos para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales y de la información pública. Por su parte al Ministerio de la Defensa le corresponde establecer los mecanismos suficientes para que la información se encuentre a disposición y control de la ciudadanía.

Igualmente me considero necesario referirme a la crítica formulada respecto a una "Innecesaria sobreabundancia normativa", ya que, demás es decir, que de acuerdo a la teoría de la interpretación normativa, el sistema legal es un todo armónico que debe de valorarse de manera integral, es decir, que las fuentes formales: Constitución, Tratados (de acuerdo al artículo 144 de la constitución) y Leyes, así como la jurisprudencia nacional e internacional (Principio de Convencionalidad) no dejan espacio a lagunas normativas, obligando al aplicador de la norma, en éste caso el IAIP, a invocar las diferentes fuentes que para el caso en concreto son aplicables según su criterio.

### **III. Finalmente, sobre la supuesta contravención del principio de verdad material y aportación de prueba en el proceso de apelación.**

El IAIP toma como criterio, el principio de máxima publicidad, por lo cual no corresponde a ésta parte, probar en que funda su interés, sino más bien en la audiencia probatoria, se carga a la autoridad demandada a que pruebe la afirmada inexistencia de la información; siendo un deber de la Administración facilitar a la ciudadanía la información requerida, en caso de denegatoria como aquí ha ocurrido, el Ministerio de la Defensa debió sustentar los motivos en los cuales fundó su decisión, quedando éstos a control del IAIP que los valorará conforme a las reglas de la sana critica.

Por tanto en éste caso, mi ausencia a esa audiencia, no debe de significar una alteración de los resultados del acto celebrado.

En atención a los argumentos expuestos, respetuosamente pido:

### **IV. Petitorio.**

- a) Se admita el presente escrito
- b) Se tenga por contestado el recurso de revocatoria interpuesto por el Ministerio de Defensa Nacional



- V. Designación para oír actos de notificación:**

Presentado por María Ester Alvarenga Chinchilla  
 Quién se identifica con DUI del 23 de 06 a las 15:05 horas  
 de 20 14. Junto con —





NUE 71-A-2013 (HF)

Alvarenga Chinchilla contra Ministerio de la Defensa Nacional

Revocatoria

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las nueve horas con diez minutos treinta y uno de octubre de dos mil catorce.

La ciudadana **María Ester Alvarenga Chinchilla**, contestó el traslado conferido en razón del recurso de revocatoria presentado por el **Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)**, contra la resolución definitiva emitida el 5 de mayo del corriente año.

**I.** Del planteamiento del recurso y de su correspondiente contestación se extraen los siguientes argumentos expuestos por las partes:

**A)** El ente obligado alegó una supuesta trasgresión al principio de legalidad por falta de legitimación activa de la señora **Alvarenga Chinchilla**, para interponer el recurso de apelación, debido a que, la solicitud que dio inicio al presente procedimiento de acceso a la información fue realizada únicamente por la señora **María Dolores Ortíz**, quien fue acompañada por otras dos personas, entre las que se encontraba la apelante; sin embargo éstas no portaban su documento de identificación, por lo que la solicitud se tramitó únicamente a nombre de la señora **Ortíz**. Para probar este punto ofrece la declaración jurada de la señorita **Nayla Carolina Abrego**, secretaria de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del **MDN**.

Por su parte, la apelante manifestó que la solicitud de información fue realizada de manera conjunta, suscrita por tres ciudadanas; y que, en todo caso, si la administración detectó alguna deficiencia formal debió advertirlo en tiempo, por lo que considera que la

situación fue convalidada de manera tácita, y no puede ser alegada en favor de la administración de manera posterior.

**B)** Del mismo modo, el **MDN** alega una supuesta violación al *principio de legalidad por el exceso de competencia del IAIP* al ordenar la recuperación o reconstrucción de la información solicitada, lo que considera una actuación *arbitraria* que contraviene lo dispuesto en los Art. 58, 66 inciso 3º y 96 de la LAIP, además señala que corresponde la Fiscalía General de la República llevar a cabo las diligencias que pretendan subsanar la inexistencia de la información; asimismo, afirma que este Instituto no debe aplicar estándares de otros países, pues ello lo aparta de la verdadera finalidad del Derecho de Acceso a la Información (DAIP).

Sobre este punto la apelante manifestó que, la facultad de permitir el acceso a la información, dispuesta en la letra “d” del Art. 96 de la LAIP, conlleva como consecuencia lógica, la facultad de ordenar que se disponga de tal información, y según lo dispuesto en la letra “j” del Art. 58 de la LAIP, corresponde a este Instituto crear los lineamientos para el mantenimiento, seguridad y protección de la información pública.

También manifiesta que el sistema legal, de acuerdo a la teoría de la interpretación normativa, es un todo armónico y por lo tanto deben valorarse de manera integral todas las fuentes formales del Derecho, incluyendo la Constitución, las leyes vigentes, los tratados y la jurisprudencia nacional e internacional.

**C)** También, el **MDN** argumentó una supuesta “*contravención al principio de verdad material, de contradicción y aportación de prueba*” dentro del procedimiento de apelación, pues, las diferentes instancias del Estado deben dar primacía a la verdad material frente a la verdad formal; sin embargo, en el caso en análisis, en opinión del ente obligado, este Instituto actuó de manera parcializada, a favor de los argumentos de la apelante; también, señala que la inasistencia de la apelante a la audiencia oral constituye una falta respeto y una renuncia a su derecho de aportar prueba y verter sus alegatos, lo que a su criterio justifica la falta de legitimación activa que alega.

De la misma forma, el **MDN** manifiesta que este Instituto se refiere a la verdad material como una responsabilidad exclusiva del Estado, para el caso en concreto la Fuerza Armada de El Salvador, en el contexto de lo que llama “*supuestas violaciones a derechos humanos*”, mientras que, en realidad, el esclarecimiento de la verdad material requiere de la colaboración de diversas instituciones, relacionadas con los supuestos hechos.

Al respecto la apelante manifestó que, como consecuencia del principio de máxima publicidad, le corresponde al **MDN** la carga de la prueba, por lo que corresponde a éste sustentar con evidencias la declaratoria de inexistencia de la información.

D) El ente obligado finalmente, en virtud del principio de verdad material, ofrece como prueba la siguiente documentación:

1. Acta notarial del 12 de mayo del corriente año, elaborada ante los oficios del licenciado Yacir Ernesto Fernández Serrano, en la que comparece la señorita Nayla Carolina Abrego Serrano, y declara sobre el procedimiento de acceso a la información seguido ante el **MDN**.
2. Acta del 9 de mayo del corriente año, elaborada en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; en la que se detalla la realización de una nueva búsqueda de la información solicitada, sin que ésta pudiera ubicarse la misma, declarando su inexistencia.
3. Acta del 10 de mayo del corriente año, elaborada en el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; en la que se detallan los procedimientos seguidos originalmente para la búsqueda de la información solicitada.
4. Acta del 9 de mayo del corriente año, elaborada en la Oficina I “Personal” de la Quinta Brigada de Infantería; en la que se detalla los procedimientos seguidos originalmente para la búsqueda de la información solicitada.
5. Acta del 9 de mayo del corriente año, elaborada en el Destacamento Militar número Cuatro de San Francisco Gotera; en la que se detalla los

procedimientos seguidos originalmente para la búsqueda de la información solicitada.

II. Expuesto lo anterior, este Instituto, antes de proceder a analizar el resto de los argumentos de las partes, considera oportuno pronunciarse sobre los elementos probatorios aportados en esta etapa procesal, y la supuesta trasgresión al principio de verdad material, de contradicción y aportación de prueba.

El ente obligado manifestó que, este Instituto incorporó en la resolución impugnada elementos relacionados con la falta de justificación sobre las diligencias seguidas para confirmar la inexistencia de la información, por lo que puede controvertir —en esta etapa— tales argumentos, por lo que, con base al Art. 102 de la LAIP en relación con el Art. 312 del CPCM, aporta los documentos antes referidos.

Al respecto, cabe mencionar que las disposiciones legales citadas por el recurrente, efectivamente regulan el **derecho de probar**, sin embargo este derecho no puede considerarse absoluto, y su ejercicio se encuentra sometido al principio de legalidad, así la aportación de prueba, tanto en sede administrativa como judicial se encuentra sometida a las reglas y límites establecidos en la Constitución y las leyes.

De conformidad con el Art. 102 de la LAIP, en lo referente al recurso de revocatoria y en todo lo que no riña los principios y fines de la LAIP, son aplicables al procedimiento de revocatoria las disposiciones Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM). Así, del análisis de la estructura procedimental se concluye que la revocatoria es un recurso meramente argumentativo que no contempla una etapa de desahogo de prueba, cuya tramitación debe ser rápida y sencilla; además, conlleva un carácter de *no devolutivo*, es decir, que conoce de dicho recurso el mismo ente que dictó la resolución impugnada. Por tanto, la prueba aportada por el MDN, detallada en los números 1, 3, 4 y 5 de la letra “D” del romano anterior debe rechazarse por inadmisible y no ser tomada en cuenta en la deliberación de este caso, pues

64

debió aportarse en el momento procesal oportuno, que expiró una vez concluida la audiencia oral.

Si bien es cierto, con base en el principio de verdad material y en concordancia con lo dispuesto en el Art. 94 de la LAIP, las resoluciones administrativas deben ajustarse a la realidad que resultare de los hechos probados en el proceso, y las investigaciones deben encaminarse a tal objetivo, también debe valorarse que, de acuerdo a lo estipulado por los Art. 50 letras "b" y "f", y 82 inciso final de la precitada Ley, corresponde a los Oficiales de Información documentar debidamente los trámites realizados en la sustanciación y tramitación de las solicitudes de información, para lo que debe elaborarse un expediente administrativo, que deberá contener un registro de todas las actividades realizadas para la ubicación de la información, y que puede ser objeto de valoración en un eventual recurso de apelación.

Las meras alegaciones de las partes no son suficientes para dar por probado un hecho o suceso, para el caso en concreto, si el ente obligado pretendía acreditar la realización de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, esta búsqueda debería estar reflejada en el expediente administrativo correspondiente; es más, precisamente son estos los puntos que no logró acreditar en el procedimiento, pues no comprobó la inexistencia de la información, no obstante, sobre él recae la carga de la prueba. El hecho de intentar acreditar tales puntos, en esta etapa del proceso, a través de actas elaboradas varios meses después de realizada la supuesta búsqueda, denota no solo una falta de diligencia de parte de los representantes del ente obligado, quienes contaron con el período de instrucción para aportar tales elementos, sino también el irregular trámite de la solicitud de información.

Por otra parte, el acta detallada en el número 2 letra D del romano anterior, del 9 de mayo del corriente año, elaborada en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que detalla la realización de una nueva búsqueda de la información solicitada, los procedimientos llevados a cabo para tal efecto, y confirma la inexistencia de la información, es acorde a lo ordenado en la letra "b" de la resolución definitiva pronunciada por este Instituto a las nueve

horas y treinta minutos del 9 de mayo del corriente año; por lo que ésta debe tenerse por cumplida únicamente en lo relativo a la realización de una nueva búsqueda de la información solicitada en dicha unidad militar.

Con base en lo anteriormente expuesto, corresponde declarar sin lugar, respecto de este punto, la revocatoria interpuesta y tener por cumplida parcialmente la resolución impugnada, respecto a la realización de una nueva búsqueda de la información solicitada.

**III.** En cuanto a la supuesta trasgresión al principio de legalidad, por la falta de legitimación activa de la apelante alegada por el MDN, cabe mencionar que, en el folio 9 de este expediente consta copia de la solicitud de información realizada por la apelante de forma conjunta con las ciudadanas Marina Dolores Ortiz y María Margarita Zamora Tobar, en la que puede apreciarse el sello de la Unidad de Acceso a la Información del MDN, y su recepción por parte de Carolina Abrego, el 28 de octubre de 2013.

Una vez recibida la solicitud, con base en lo dispuesto en el Art. 66 de la LAIP, el ente obligado debió realizar las observaciones correspondientes a cualquier deficiencia que hubiere detectado, a fin de que las solicitantes la subsanaran, sobre todo cuando se trata de requisitos de forma que no afectan el fondo de la petición, tal como la falta de presentación de documento de identidad. La falta de prevención no puede traer como consecuencia un simple rechazo, pues debe obrar en todo caso el principio de informalidad, máxime en procedimientos que responden a principios de sencillez y prontitud en los que no se requiere procuración obligatoria. De ahí que, advertir posibles irregularidades forma parte del deber de los Oficiales de Información de auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes, consagrado en el Art. 50 letra “c” de la LAIP; en otras palabras, las consecuencias del posible incumplimiento de una carga legal no puede ser ahora invocado como justificación y beneficiar así al propio ente.

En el caso en análisis, la solicitud de información fue presentada de manera conjunta y recibida en legal forma, por lo que, todas las solicitantes estaban habilitadas para interponer el recurso de apelación, incluso de manera individual. La facultad para recurrir de la



resolución pronunciada por el Oficial de Información del MDN, no puede depender de la misma entidad contra la que se recurre, especialmente si el ente obligado no adoptó las providencias necesarias para subsanar los defectos formales de la solicitud.

IV. En cuanto a los argumentos de que este Instituto excedió sus competencias al ordenar reconstruir la información solicitada por las ciudadanas y aplicó indebidamente la jurisprudencia del sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, cabe mencionar que, contrario a lo sostenido por el recurrente, la aplicación de los precedentes constitucionales corresponde no solo a los entes jurisdiccionales, sino también a los entes administrativos llamados a la aplicación del sistema jurídico, como lo ha manifestado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: "(...) el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional requiere de esta Sala la elaboración de criterios jurisprudenciales uniformes que, en la mayor medida de lo posible, suministren seguridad jurídica en relación con la interpretación y aplicación que se hace de las disposiciones constitucionales. **Dicha labor obliga a entender a la *jurisprudencia constitucional* como una actividad racional y argumentativa creadora de *reglas constitucionales*, las cuales han de convertirse en un canon de obligatoria observancia para este Tribunal –autoprecedente– y para las otras entidades jurisdiccionales –precedentes verticales–, así como para los particulares y los poderes públicos, con el fin de poder dirimir los casos futuros, siempre y cuando estos guarden una semejanza relevante con los ya decididos**"<sup>1</sup>(Negritas añadidas).

Para comprender la obligación de todos los entes estatales de colaborar, en la medida de sus responsabilidades, en la recuperación o reconstrucción de la información solicitada, este Instituto retomó la sentencia de Amparo 665-2010, del 5-II-2014, en la cual se dotó de contenido al **derecho a conocer la verdad** y se aplicó al caso en concreto, pues la libertad de información pretende asegurar la publicación, divulgación o recepción de hechos con relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su existencia, para tomar decisiones libres; así el derecho a conocer la verdad implica el libre

---

<sup>1</sup> SSC-CSJ, Explicación de efectos Inc. 11-2005 de las diez horas con cuarenta y un minutos del 23-XI-2011.

acceso a información objetiva sobre aquellos hechos que hayan ocasionado vulneraciones a derechos fundamentales y a las circunstancias temporales, personales, materiales y territoriales que los rodearon y, por lo tanto, implica la posibilidad y la capacidad real de investigar, buscar y recibir información confiable que conduzca al esclarecimiento imparcial y completo de los hechos.

Además, es necesario aclarar que, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), fue ratificada por nuestro país, a través del Decreto Legislativo número cinco del 15 de junio de 1978, por lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH), en virtud del Art. 144 de la Constitución, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional y lo dispuesto en ella, en armonía con el resto de elementos que lo componen, es de obligatorio cumplimiento.

Las resoluciones de la CrIDH, constituyen interpretaciones de la convención misma y, por lo tanto, también son de obligatorio cumplimiento, como lo ha manifestado Eduardo Ferrer Mac-Gregor<sup>2</sup>, la norma interpretada por dicho Tribunal adquiere el mismo grado de eficacia que el texto convencional, tratándose del único órgano jurisdiccional previsto en el Sistema Interamericano, con competencia última y definitiva en la interpretación de la CADH (y sus protocolos adicionales), de donde deriva la obligatoriedad de sus interpretaciones. Este criterio constituye un estándar mínimo establecido jurisprudencialmente por la propia Corte IDH al definir el parámetro del “control difuso de convencionalidad”.

En consecuencia, del precedente jurisprudencial de la CrIDH, contenido en la sentencia del caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) contra Brasil, este Instituto extrajo la obligación que tienen los Estados, en materia de graves violaciones a los

---

<sup>2</sup> FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano, en Revista de Estudios Constitucionales. Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca Año 9, No 2, 2011.

derechos humanos, de realizar las diligencias necesarias para recuperar o reconstruir la información cuando esta sea declarada inexistente; por lo que este Instituto considera que ordenar al **MDN** la realización de diligencias encaminadas a reconstruir o recuperar la información solicitada se encuentra dentro del alcance normativo de la letra “d” del Art. 96 de la LAIP interpretada a la luz del precedente jurisprudencial antes citado, en lo referente a ordenar a la dependencia o entidad que permita al particular el acceso a la información. El ejercicio legítimo de esta facultad antes que generar resistencias y justificaciones para no cumplir con la orden de reconstruir la información, debe analizarse a la luz de las normas constitucionales que dan vida al derecho de acceso a la información así como al Sistema Interamericano de Derechos Humano, y concebirse no sólo como una oportunidad de garantizar el derecho a la verdad sino, también, como un mecanismo para fortalecer la democracia, el acceso a la información y la legitimidad en el ejercicio del poder público, de cara al control ciudadano que debe existir sobre la actuación y la función pública.

Conforme a lo anteriormente expuesto, la aplicación de tales precedentes no constituye una trasgresión al principio de legalidad, ni tampoco implica que se aplique al caso los estándares de otros países, como lo ha manifestado el recurrente, todo lo contrario, constituye la aplicación de precedentes jurisdiccionales de obligatorio cumplimiento para los Estados parte de la CADH incluido, lógicamente, El Salvador. Es más, la no aplicación de estos precedentes constituiría una omisión lamentable y un retroceso en el desarrollo jurídico nacional, en las decisiones administrativas y judiciales. En consecuencia, dado que no ha existido transgresión alguna del ámbito de competencia de este Instituto, al ordenar al ente obligado que recupere o reconstruya la información solicitada, debe declararse sin lugar la revocatoria interpuesta.

**POR TANTO**, de conformidad con las razones antes expuestas y Arts. 6 y 18 Cn.; 95 y 102 de la LAIP, y 505 del Código Procesal Civil y Mercantil, este Instituto **resuelve**:

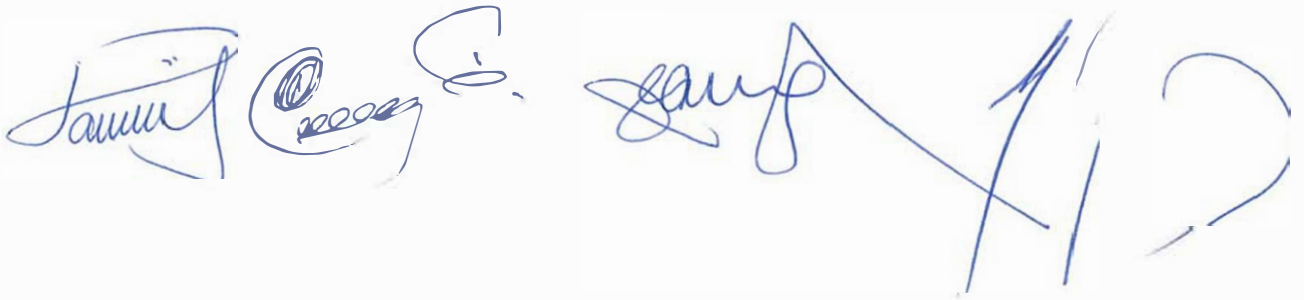
a) **Declárese sin lugar** el recurso de revocatoria, en todas sus partes, planteado por el **Ministerio de la Defensa Nacional**, respecto de revocar la resolución emitida por este

Instituto en la que se ordenó a su titular, que ejecute las diligencias necesarias para recuperar o reconstruir la información requerida y entregarla a los ciudadanos solicitantes.

b) **Estese a lo dispuesto** en la resolución emitida por este Instituto a las nueve horas y treinta minutos del 5 de mayo de 2014, ***so pena de proceder al inicio del procedimiento sancionatorio*** por la causal del Art. 76 Lit. "c" del apartado de Infracciones Graves, de la LAIP.

c) **Téngase por cumplida parcialmente** la resolución pronunciada por este Instituto a las nueve horas y treinta minutos del 5 de mayo del corriente año, únicamente en lo relativo a realizar una nueva búsqueda de la información en los archivos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

***Notifíquese.-***

The image shows four handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is 'Javier' followed by a circular stamp containing the word 'RECIBO'. The second signature is 'Cecilia'. The third signature is 'Luis'. The fourth signature is 'H.D.'.

**PRONUNCIADA POR LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN**

RV



NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

## NOTIFICACIÓN NUE 71-A-2013 Resolución de revocatoria

2 mensajes

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

2 de diciembre de 2014, 9:46

Sra. María Ester Alvarenga Chinchilla

Con agrado adjunto resolución de recurso de revocatoria interpuesto en relación al caso NUE 71-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Atentamente,

Milton Hernández  
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2205-3800



**NUE 71-A-2013 Resolución de revocatoria.pdf**  
3498K

**Ester Alvarenga**

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

2 de diciembre de 2014, 12:27

Saludos cordiales

En efecto acuso de recibido y que leeré en la noche.

Saludos

Ester

Date: Tue, 2 Dec 2014 09:46:22 -0600

Subject: NOTIFICACIÓN NUE 71-A-2013 Resolución de revocatoria





## NOTIFICACIÓN NUE 71-A-2013 Resolución de revocatoria

2 mensajes

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

2 de diciembre de 2014, 9:46

Para: OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirmdn@faes.gob.sv>

Cnel. Joel Antonio Rivas Moreno  
Oficial de Información  
Ministerio de la Defensa Nacional

Con agrado adjunto resolución de recurso de revocatoria interpuesto en relación al caso NUE 71-A-2013. Favor leer con detenimiento.

Así mismo, en virtud de lo establecido en el Art. 69 de la LAIP, se ruega hacer del conocimiento de la misma al Lic. René Arnoldo Castellón Mejía, en su calidad de Apoderado Especial del Ministerio de la Defensa Nacional

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Atentamente,


Milton Hernández  
Notificador IAIP.-

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2205-3800

 **NUE 71-A-2013 Resolución de revocatoria.pdf**  
3498K

OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirmdn@faes.gob.sv>

2 de diciembre de 2014, 10:03

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Atentamente acuso de recibo, de la presente resolución de revocatoria.

Saludos cordiales.

Mirna Cornejo

Ministerio de la Defensa Nacional.  
Oficina de Información y Respuesta (OIR)  
del Ministerio de la Defensa Nacional  
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla  
Tel.(503) 2250-0134, Email: oirmdn@faes.gob.sv





NUE 71-A-2013 (HF)

**SEÑORES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**SILVIA CAROLINA GUZMÁN ÁLVAREZ**, mayor de edad, Abogada y Notaria, del domicilio de departamento de La Libertad, con carné de Abogada número, a ustedes con todo respeto **LES EXPONGO**:

Que tal como lo compruebo con copia certificada por Notario, de Escritura Pública de Poder Especial, que anexo al presente escrito, soy Apoderada del señor DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS, Ministro de la Defensa Nacional.

Que en tal calidad y siguiendo instrucciones precisas de mi mandante, por este medio y de conformidad con lo establecido en los Artículos 166 del Código Procesal Civil y Mercantil, y 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública, vengo ante esta instancia a solicitar se me proporcione copia certificada e íntegra del referido expediente, comprometiéndome a sufragar los gastos que mi solicitud genere.

Asimismo, por este medio autorizo a la Licenciada María José Girón, mayor de edad, Abogada, del domicilio de la ciudad y departamento de San Miguel, quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad número:, y/o a Susana Cecibel Gavarrete Galdámez, mayor de edad, estudiante, del domicilio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad número: para que puedan retirar la copia certificada solicitada.

Por lo antes expuesto, **LES PIDO**:

- Me admita el presente escrito, junto con copia certificada por Notario de Escritura Pública de Poder Especial.
- Se me extienda copia certificada e íntegra, del expediente mencionado.
- Se tengan por autorizadas de mi parte a la Licenciada María José Girón, y/o Susana Cecibel Gavarrete Galdámez, para que puedan retirar la copia certificada solicitada.

Señalo para ser notificada, la siguiente dirección

San Salvador, cinco de enero de dos mil quince.




Presentado por		Susana Jacobel Gervante Gálvez	
Quién se identifica con D.N.I.		a las 10:41 hrs.	
del 7 de mayo		de 2015	
Junto con		Folios anexos	

No. 236

Libro 9º

AÑO 2014

# Testimonio de Escritura Pública

DE  
PODER ESPECIAL

CAUSANTE  
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

A FAVOR  
RENE ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA  
Y  
SILVIA CAROLINA GUZMAN ALVAREZ

ANTE LOS OFICIOS DE  
YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ SERRANO  
ABOGADO Y NOTARIO



SAN SALVADOR EL SALVADOR C.A.







PAPEL PARA PROTOCOLO



DOS COLONES

DOSCIENTOS CATORCE  
**M. DE H.**

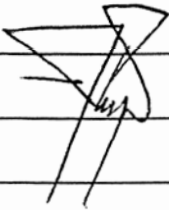
N° 15052576

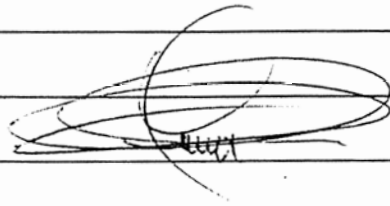
1 **NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS. LIBRO NOVENO. PODER ESPECIAL.** En la ciudad de San Salvador, a  
las ocho horas del día veintitrés de Enero del año dos mil catorce. Ante mi, **YACIR ERNESTO FERNÁNDEZ**  
2  
3 **SERRANO**, Notario, de este domicilio, comparece por una parte el señor **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**, de  
4  
5 **xxxxxxx**, Militar, del domicilio de San Marcos, Departamento de San Salvador, portador de mi 4  
6 Tributaria ; actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de la Defensa  
7 Documento Unico de Identidad número cx y Numero de Identificación **xxxxxx**  
8 Nacional, en calidad de Ministro de la  
9 Defensa Nacional, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - cero uno cero uno uno seis - cero  
10 cero seis - cero, personería que es legítima y suficiente por haber tenido a la vista, Certificación del Acuerdo Ejecutivo  
11 dado en Casa Presidencial Número DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE de fecha quince de Julio de dos mil trece: en  
12 cual consta que el señor Presidente de la República en su Calidad de Comandante General de la Fuerza Armada en  
13 uso de las facultades legales y de conformidad a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento  
14 sesenta y dos de la Constitución de la República, lo nombró y juramento como Ministro de la Defensa Nacional;  
15 acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial número CIENTO VEINTINUEVE, Tomo CUATROCIENTOS de fecha  
16 quince de Julio de dos mil trece; Y ME DICE: I) Que confiere **PODER ESPECIAL**, a favor de los Licenciados **RENÉ**  
17 **ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA**, mayor de edad, Abogado, del domicilio de la ciudad y departamento de San  
18 Salvador, **SILVIA CAROLINA GUZMÁN ÁLVAREZ**, mayor de edad, Abogada, del domicilio de  
19 departamento de La Libertad; para que en nombre de la Secretaria de Estado de la cual es titular, inicien, sigan y  
20 fenezcan diligencias ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en los cuales tenga o pueda tener  
21 interés el Ministerio de la Defensa Nacional, ante las autoridades administrativas y de cualquier otra indole aunque aqui  
22 no se nominen, pues desea que sus Mandatarios no tengan ninguna dificultad en el ejercicio del Mandato. Asimismo los  
23 faculta para firmar los documentos que fueren necesarios, reciban aquellos que tengan que entregárseles, celebren  
24 conciliaciones de cualquier naturaleza y especialmente en materia las que tengan que ver con el Instituto de Acceso a la Información Pública; confiere a sus Mandatarios las facultades generales del Mandato, todas que expliqué al

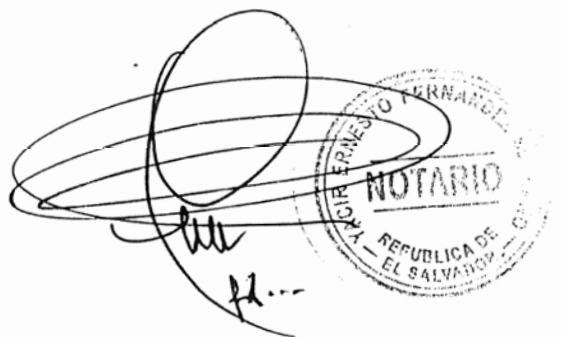





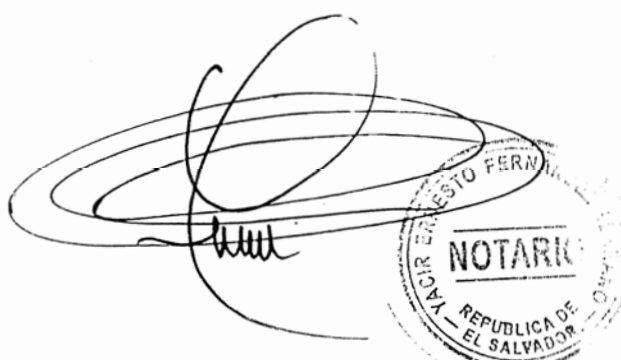
1 otorgante, cerciorándome de que la conoce, comprende y por ello las confiere a sus Apoderados. Asi se expresó el  
2 compareciente, a quien expliqué los efectos legales del presente instrumento el cual leído que le fue por mí,  
3 íntegramente, en un sólo acto, sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-

4  
5  
6  
7 

8   
9

  
The stamp is circular and contains the text: "NOTARIO", "GUILLERMO FERNANDEZ", "REPUBLICA DE EL SALVADOR".

...SO ANTE MI del FOLIO DOSCIENTOS DOCE FRENTE Y VUELTO del Libro Noveno de mi Protocolo que vence el día veinte del mes de Junio de dos mil catorce, y para ser entregado a los Licenciados RENE ARNOLDO CASTELLÓN MEJÍA y SILVIA CAROLINA GUZMAN ALVAREZ, extendiendo, firmo y sello el presente TESTIMONIO DE PODER ESPECIAL, en la ciudad de San Salvador, a los veintitrés días del mes de Enero de dos mil catorce.



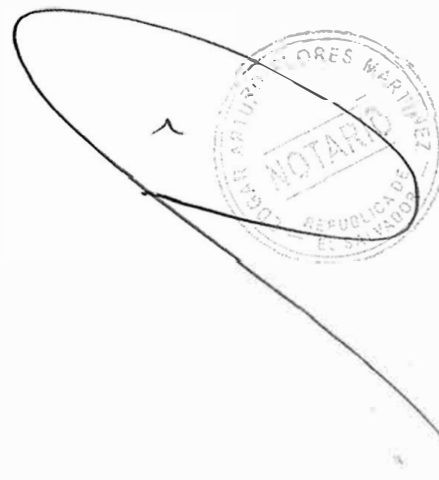
YACINTO FERNANDEZ  
NOTARIO  
REPUBLICA DE EL SALVADOR

ARMANDO LOPEZ MARINEZ  
NOTARIO  
REPUBLICA DE EL SALVADOR

**EL SUSCRITO NOTARIO**, con base al artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias CERTIFICA: que la presente fotocopia, que consta de tres folio, es conforme y fiel a su original, con el cual se confrontó en la Ciudad de San Salvador, a veintiocho días del mes de enero de dos mil catorce.

A handwritten signature consisting of several overlapping loops.

uu





NUE 71-A-2013 (HF)

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintiséis de enero de dos mil quince.

El 7 de enero del corriente año, EL **Ministerio de la Defensa Nacional**, por medio de su apoderada, **Silvia Carolina Guzmán Álvarez**, solicitó copia certificada del presente expediente.

De conformidad con el artículo 166 Inc. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil de aplicación supletoria según el artículo 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública, este Instituto **resuelve:**

a) **Ordénese** a la Jefa de la Unidad Jurídica de este Instituto que, de conformidad con el Acuerdo de Pleno número 11, extienda copia certificada del presente expediente.

b) **Requírese** al **Ministerio de la Defensa Nacional** que retire en las instalaciones de este Instituto la copia certificada solicitada, en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la respectiva notificación.

**Notifíquese.**

Three handwritten signatures in blue ink are visible. The first signature on the left is a cursive 'C' followed by several loops. The middle signature is a large, stylized 'G' followed by 'u' and 'b' and a horizontal line. The third signature on the right is a cursive 'S' followed by 'a' and 'n' and a horizontal line.

**PRONUNCIADO POR LOS COMISIONADOS QUE LO SUSCRIBEN**

RM





NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

## NOTIFICACIÓN NUE 71-A-2013 Certificación de expediente

2 mensajes

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

27 de enero de 2015, 9:52

Sra. María Ester Alvarenga Chinchilla

Con agrado adjunto auto por el que se resuelve sobre la solicitud de copia certificada del expediente NUE 71-A-2013, planteada por la Licda, Silvia Carolina Guzmán Álvarez, en su calidad de Apoderada del Ministro de la Defensa Nacional. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Atentamente,

Milton Hernández  
Notificador IAIP.-


INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2205-3800

2 archivos adjuntos

 **NUE 71-A-2013 Solicitud de certificación de expediente.pdf**  
2041K

 **NUE 71-A-2013 Certificación de expediente.pdf**  
497K

Ester Alvarenga

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

27 de enero de 2015, 12:45

Confirmando de recibido y después lo leo.

Saludos cordiales

Ester

Date: Tue, 27 Jan 2015 09:52:18 -0600

Subject: NOTIFICACIÓN NUE 71-A-2013 Certificación de expediente





## NOTIFICACIÓN NUE 71-A-2013 Certificación de expediente

2 mensajes

NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

27 de enero de 2015, 9:52

Para: OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirmdn@faes.gob.sv>

Ángel María González Sermeño  
**Oficial de Información**  
**Ministerio de la Defensa Nacional**

Con agrado adjunto auto por el que se resuelve sobre la solicitud de copia certificada del expediente NUE 71-A-2013, planteada por la Licda, Silvia Carolina Guzmán Álvarez, en su calidad de Apoderada del Ministro de la Defensa Nacional. Favor leer con detenimiento.

Se le solicita enviar acuse de recibido.

Atentamente,

Milton Hernández  
**Notificador IAIP.-**

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fomentando la Cultura de Transparencia

Dirección: Prolongación Avenida Masferrer, N° 88, Colonia San Antonio Abad, San Salvador.

Teléfono: 2205-3800



**NUE 71-A-2013 Certificación de expediente.pdf**  
497K

OFICINA INFORMACION Y RESPUESTA <oirmdn@faes.gob.sv>

27 de enero de 2015, 10:06

Para: NOTIFICACIONES IAIP <notificaciones.iaip@gmail.com>

Atentamente acuso de recibo de la notificación NUE 71-A-2013 Certificación de expediente.

Cordiales saludos

Mirna Cornejo  
Ministerio de la Defensa Nacional.  
Oficina de Información y Respuesta (OIR)  
del Ministerio de la Defensa Nacional  
Kilómetro 5 1/2 carretera a Santa Tecla  
Tel.(503) 2250-0134, Email: oirmdn@faes.gob.sv



La infrascrita Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Acceso a la Información Pública, **Kryssya Michaelle Sermeño Camacho**, por este medio hace constar que se ha hecho presente en las instalaciones de este Instituto **Silvia Carolina Guzmán Álvarez**, quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad número, y que habiendo concluido el procedimiento de apelación de referencia NUE 71-A-2013 (HF) mediante resolución de revocatoria de las nueve horas con diez minutos del 31 de octubre de 2014, en este acto se le hace entrega de una copia certificada del referido expediente. Sin más que hacer constar, firmamos la presente en la ciudad de san salvador, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil quince.









Gabriela Gamez &lt;ggamez@iaip.gob.sv&gt;

---

**Re: Solicitud de información NUE-71-A-2013**

---

**Unidad de Acceso a la Información Pública** <uaip@iaip.gob.sv>

16 de marzo de 2016, 16:00

Cc: Recepción de Denuncias | IAIP &lt;oficialreceptor@iaip.gob.sv&gt;

Buen día, con respecto a su petición le indicó que la referencia corresponde a un procedimiento de apelación que ha sido tramitado en la Unidad Jurídica y para realizar consultas sobre casos donde son partes del proceso, deben realizarlo directamente con dicha Unidad.

Le copia a la licenciada Gabriela Gámez, Oficial Receptora para que les asista.

Saludos cordiales.

Vicente Hernández  
Oficial de Información

El 16 de marzo de 2016, 15:46, <juridico@probusqueda.org.sv> escribió:

Buenos días

Respetuosamente, mediante documento adjunto, los ciudadanos Margarita Zamora, Claudia Interiano, Eduardo García y Helí Jeremías Hernández, solicitamos información acerca del procedimiento NUE 71-A-2013.

Por favor dar de recibido.

Atentamente, las y los solicitante.

---

**Unidad de Acceso a la Información Pública**

(503) 2205-3800 Fax 2205-3880 Opc. 901

Avenida Masferrer y Calle al Volcán No.88, Edif. Oca Chang

uaip@iaip.gob.sv

 Web  Twitter  Youtube



Instituto de Acceso  
a la Información Pública

---

"Fomentando la cultura de transparencia"





Gabriela Gamez &lt;ggamez@iaip.gob.sv&gt;

**Re: Solicitud de información NUE-71-A-2013**

Oficial Receptor - IAIP &lt;oficialreceptor@iaip.gob.sv&gt;

17 de marzo de 2016, 8:15

Acuso de recibido su correo electrónico. Favor remitir toda la documentación y consultas unicamente a este correo electrónico.

[El texto citado está oculto]

Gabriela Gámez

**Oficiala Receptora de Denuncias**

(503) 2205-3800 Fax 2205-3880 Opc. 901

Avenida Masferrer y Calle al Volcán No.88, Edif. Oca Chang

oficialreceptor@iaip.gob.sv

Web Twitter Youtube



Instituto de Acceso  
a la Información Pública

"Fomentando la cultura de transparencia"

Presentado por	Margarita Zamora		
Quien se identifica con	a las: 15:16		
de 16 de 3	de 20 16. Junto con escrito		
de 2 fs. 5 folios			







INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

1/1





SOLICITAMOS: a. Se admita este escrito; b. Se nos brinde información en forma de copia certificada y digital de todas las diligencias realizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública, o de aquellas en las que ha sido parte dentro del proceso contencioso administrativo iniciado por el MDN contra la resolución de dicho Instituto. Y para los efectos de ser notificados, citamos el correo j, o en su caso la dirección física situada en la dirección y teléfonos a pie de página enunciados.

En San Salvador, a los Tres días del mes de Marzo de Dos Mil Dieciséis.-

Eduardo García Doblas

Director Ejecutivo

Helí Hernández

Asesor Jurídico

Margarita Zamora Tobar

Asesora externa

